

BRIDGES NETWORK

PUENTES

Análisis y noticias sobre comercio y desarrollo sostenible

VOLUMEN 16, NÚMERO 8, OCTUBRE 2015



Estrategias emergentes de crecimiento verde

CRECIMIENTO VERDE

Crecimiento verde: el caso de Costa Rica

CRECIMIENTO VERDE Y NEGOCIOS INCLUSIVOS

El crecimiento verde y la implementación de negocios inclusivos en Colombia

CRECIMIENTO VERDE

Estrategia de crecimiento verde en Perú: evaluación y retos



International Centre for Trade
and Sustainable Development

PUENTES

VOLUMEN 16, NÚMERO 8, OCTUBRE 2015

PUENTES

Plataforma global para el intercambio de información sobre comercio y desarrollo sostenible en América Latina.

PUBLICADO POR:

ICTSD

Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible
Ginebra, Suiza

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL
Ricardo Meléndez-Ortiz

EDITOR EN JEFE
Andrew Crosby

DIRECTORA EDITORIAL
Perla Buenrostro Rodríguez (ICTSD)

EDITOR
Patricio Rosas Opazo

ASISTENTE EDITORIAL
Juan Martín Cava

CONSEJO EDITORIAL
Carlos Murillo (CINPE)
Pedro Roffe (ICTSD)
Miguel Rodríguez (ICTSD)

DISEÑO GRÁFICO
Flarvet

LAYOUT
Oleg Smerdov

PUENTES agradece sus comentarios y sugerencias en puentes@ictsd.ch

Para eventuales contribuciones consulte nuestra página web <http://ictsd.org/news/puentes/>

DESARROLLO SOSTENIBLE

- 4 **Reflexiones sobre la gobernanza económica global a inicios de una "nueva era"**
Ricardo Meléndez-Ortiz

CRECIMIENTO VERDE

- 10 **Crecimiento verde: el caso de Costa Rica**
Álvaro Cedeño Molinari

CRECIMIENTO VERDE Y NEGOCIOS INCLUSIVOS

- 14 **El crecimiento verde y la implementación de negocios inclusivos en Colombia**
María Alejandra Pineda-Escobar

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO VERDE

- 19 **Estrategia de crecimiento verde en Perú: evaluación y retos**
Jorge Caillaux y Marcos Alegre

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO VERDE

- 24 **Potencial y desafíos para una estrategia de crecimiento verde en Brasil**
Carlos Eduardo Frickmann Young

ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO

- 30 **El TPP y la propiedad intelectual: viejos conocidos y nuevos desafíos**
Pedro Roffe, Xavier Seuba y Mariano Genovesi

- 36 **Sala de prensa**

- 38 **Publicaciones sugeridas**

Estrategias emergentes de crecimiento verde



La crisis económica global de 2008 y sus importantes repercusiones, la pérdida de tracción del concepto de desarrollo sostenible y la creciente preocupación por los impactos del cambio climático propiciaron el surgimiento de los conceptos de economía verde y crecimiento verde.

Varias instituciones internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, fundamentalmente, han desarrollado en los últimos años una serie de recomendaciones, estudios y directrices para guiar y propiciar un crecimiento renovado que incorpore el medio ambiente como eje central y que además incluya a las clases más vulnerables.

Transitar de un modelo de crecimiento marrón a uno verde exige una visión integral en cuanto a innovación, lucha contra la desigualdad, desarrollo sostenible, competitividad, empleo y por supuesto voluntad política.

La región latinoamericana se encuentra en un momento muy interesante de su agenda de crecimiento verde. Salvo el caso más avanzado y emblemático de Costa Rica que persigue convertirse en carbono neutral en 2020, nuestros países están definiendo los parámetros de sus estrategias de crecimiento verde, los sectores productivos donde existen más oportunidades, los recursos necesarios para lograr dicha transición y la manera más efectiva de implementar esas políticas emergentes.

Colombia, por ejemplo, está intentando incorporar a la población base de la pirámide y se está enfocando en áreas como cosméticos y biodiversidad. Perú, a su vez, está evaluando el fortalecimiento de su Estrategia Nacional de Biodiversidad y replanteando sectores como el energético, forestal e industrial. Brasil, por su parte, aun con sus esfuerzos más recientes por reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, podría estar experimentando con la reprimarización de su economía un revés en sus objetivos tanto de economía verde como de mitigación del cambio climático.

De cara a la próxima cumbre climática en París, en la que se espera firmar un acuerdo vinculante en la materia sobre la base de las contribuciones determinadas nacionalmente (INDC, por sus siglas en inglés), las estrategias de crecimiento verde son un componente crucial, primero para desacoplar el crecimiento económico del impacto ambiental y, segundo, para luchar con la grave desigualdad y plantear nuevas posibilidades de desarrollo en el siglo XXI.

El equipo de Puentes

DESARROLLO SOSTENIBLE

Reflexiones sobre la gobernanza económica global a inicios de una “nueva era”

Ricardo Meléndez-Ortiz

¿Qué cambios ha experimentado la gobernanza económica global en las últimas dos décadas a la luz de la próxima aprobación de la agenda de desarrollo post 2015 y las negociaciones para un nuevo régimen climático? ¿Qué hemos aprendido al respecto? De acuerdo a lo anterior, el presente artículo traza el cambiante contexto del comercio, la inversión y el desarrollo sostenible.

Los Gobiernos alrededor del mundo acaban de adoptar un nuevo Programa global de desarrollo para los próximos 15 años, que comprende 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en la última cumbre organizada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Presentada como un esfuerzo de integración de aspectos económicos, ambientales y sociales del desarrollo para los próximos 15 años, la nueva lista de prioridades internacionales tiene como objetivo su aplicación universal, teniendo en cuenta las diferentes realidades y capacidades y respetando las políticas y las prioridades nacionales. El documento final del nuevo programa de desarrollo para el período posterior a 2015, titulado “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” también incluye una declaración de los líderes del mundo que define los principios y compromisos comunes en materia de cooperación multilateral en el contexto actual, una sección sobre los medios de implementación y otra sobre los procesos de seguimiento y examen en los ámbitos nacional, regional y mundial.

A finales de noviembre, los miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunirán en París, Francia, para tratar de llegar a un acuerdo sobre un nuevo régimen climático global que rija después de 2020. Los Estados ya han acordado que el acuerdo previsto consistirá en compromisos nacionales individuales, definidos por los países mismos, con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, los críticos han advertido que el total de las propuestas actuales no serán suficientes para mantener el planeta por debajo del umbral de dos grados centígrados del calentamiento promedio aceptado internacionalmente por encima de los niveles preindustriales, y que se necesitarán normas de control y un reforzamiento continuo de esfuerzos en el tiempo.

A raíz de la Cumbre de París, los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se reunirán en Nairobi, Kenia, para la Décima Conferencia Ministerial de la institución. La probabilidad de resultados efectivos en esa ocasión sigue siendo incierta debido a las dificultades persistentes en las negociaciones de la Ronda de Doha y los esfuerzos megaregionales prometedores y más ambiciosos por concluir paralelamente acuerdos de integración económica del siglo 21, especialmente profundos. Afortunadamente para Nairobi, los negociadores de algunos países miembros de la OMC han sido capaces de ponerse de acuerdo sobre una extensión del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) que reduce los aranceles de casi 200 productos de tecnología adicionales, cuyo comercio anual representa US\$ 1 billón. También se está trabajando para concluir un acuerdo plurilateral de liberalizar los aranceles sobre bienes ambientales. Este último, en particular, podría ser una importante contribución a los objetivos generales de Nueva York y París.

Esta coincidencia de decisiones sobre la gobernanza mundial recuerda la acumulación de cumbres que marcaron los años 90 y principios de 2000, incluyendo, en particular, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 (Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra), la conclusión en 1994 de la Ronda Uruguay en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que llevó a la creación

de la OMC un año después y conferencias internacionales sobre el desarrollo social, los países menos adelantados (PMA), los derechos humanos, las mujeres, la alimentación, el financiamiento para el desarrollo y la sociedad de la información. Con motivo de un año que marca, de acuerdo con el Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, el comienzo de una "nueva era" de la gobernanza global, parece apropiado hacer preguntas sustantivas: ¿Cuál fue la evolución del marco de la gobernanza global en los últimos veinte años? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuál debería ser el papel del comercio y los regímenes de inversión en los próximos años para que se hagan realidad los planes de desarrollo sostenible?

El camino recorrido

Es importante ubicar los esfuerzos globales de gobernanza en el contexto histórico. En 1992 el mundo estaba saliendo de un período de fragmentación económica marcadas por la coexistencia de tres modelos distintos de desarrollo, a saber, las economías de planificación centralizada, las economías cerradas, ubicadas principalmente en el "Sur" y caracterizadas por la sustitución de importaciones asociada a controles y los espacios transatlánticos y transpacíficos, transformados por la robusta economía de Estados Unidos de la posguerra en una economía liberal amalgamada. Una dinámica se posicionó a continuación en la dirección de un nuevo mundo, susceptible de convertirse en una economía global –como sucedió a fin de cuentas de manera gradual– con la integración progresiva de economías nacionales en los mercados internacionales gracias a un conjunto coherente de políticas económicas y de marcos que permiten esta integración.

Este fue un momento decisivo donde se sembraron las semillas de un futuro mejor, liberando las fuerzas considerables de cambio, y con ellas, las tensiones igualmente importantes. Esta transición ha estimulado la creación de riqueza en formas hasta ahora desconocidas, permitiendo a millones de personas salir de la pobreza. Un triunfo en sí mismo, pero no sin costos, en parte debido a la muy poca atención a las cuestiones de equidad e inclusión social, así como una subestimación de las profundas asimetrías y de capacidades persistentes entre países en diferentes niveles de desarrollo. Por lo tanto, hoy observamos niveles peligrosos de desigualdad, tanto entre los países como dentro de ellos.

La falta de respeto por el entorno natural y por el concepto de fronteras planetarias – un concepto ya conocido– también resultó particularmente costosa. En retrospectiva, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro fue la primera oportunidad para que la comunidad internacional reflexionara de manera integral sobre la dificultad de actuar en una serie de cuestiones vitales, y en las condiciones del compromiso colectivo en este nuevo mundo. Río también ha sido una oportunidad para examinar la relación entre el medio ambiente y el desarrollo, una tarea muy necesaria.

Veinte años después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, celebrada en Estocolmo, Suecia, había quedado claro que las prioridades vigentes de desarrollo y medio ambiente siempre estarían en contra del medio ambiente. La Declaración de Río de Janeiro, con sus 27 principios y su Agenda 21, fue una propuesta con visión de futuro para transformar la gobernanza global que exigía un replanteamiento de los fundamentos de la gestión y la gobernanza económica.

Se trataba de un intento extremadamente ambicioso de reconciliación de la protección ambiental y del crecimiento económico, y de la definición de una dirección política común. Pero también se trataba de una visión concebida durante el tumultuoso período antes mencionado. Las preocupaciones abundaban sobre la desigualdad global, los términos de intercambio, el lugar de las economías en desarrollo en el nuevo entorno global, el comportamiento depredador incontrolado de las empresas multinacionales en los mercados globales y las reglas de juego inadecuadas para un mercado global. Estas dieron luz a un movimiento de rechazo a la globalización, en el cual el mecanismo intergubernamental de las Naciones Unidas y la comunidad de desarrollo parcialmente respondieron con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Sin embargo, a pesar de toda su ambición, los ODM se caracterizan por la poca atención que prestan a los temas ambientales, y no parecen haber sido afectados por la Cumbre de la Tierra, lo que desató

la confusión de los Gobiernos en relación con el concepto de desarrollo sostenible, así como fuertes críticas de la comunidad ambiental.

Río sí logró influir en la gobernanza económica global, al tiempo que las economías del mundo se movían con rapidez hacia una mayor integración. Durante la Cumbre para la Tierra, el sistema multilateral de comercio estaba en transformación cambiando, pasando del limitado GATT de 1947 a la casi universal Organización Mundial del Comercio (OMC), prácticamente duplicando la cantidad de miembros y ampliando sus materias tales como servicios, inversión o propiedad intelectual. El comercio y las normas de comercio habían sido hasta ahora el coto de un pequeño número de países, focalizados en la regulación del comercio transatlántico y transpacífico, donde algunos países en desarrollo participantes no estaban obligados por el mismo nivel de compromiso. La transición del GATT a la OMC es en parte una manifestación de los cambios de política en curso en esa época. El diseño de la OMC incorpora los principios de Río y los inserta en su nueva constitución –el primer párrafo del Acuerdo de Marrakech que se refiere al desarrollo sostenible, a los niveles de vida y a la protección del medio ambiente– además de hacer operacionales las preocupaciones ambientales a través de varios mecanismos institucionales como el [Comité de Comercio y Medio Ambiente](#).

Convergencias y divergencias

Las iniciativas de gobernanza global del año 2015 se esfuerzan cada una, en su medida, por encontrar un equilibrio entre las ventajas de una convergencia hacia un programa universal y las realidades de la divergencia natural de las situaciones nacionales y las vías de desarrollo. ¿Qué hemos aprendido en esta área después de la Cumbre de Río?

El primer cambio importante sucedido después de la Cumbre de Río es sustancial y tiene que ver con una mejor comprensión de las complejas relaciones entre la economía y el medio ambiente adquirida por la comunidad internacional. El punto de vista imperante en Río en 1992 se basaba en la curva de Kuznet, según la cual en los primeros estadios del crecimiento económico aumenta la degradación ambiental y luego desciende más allá de un cierto nivel de ingreso per cápita.

Esta teoría parecía autorizar a aquellos países menos desarrollados a seguir contaminando y maltratando los recursos naturales. Veinte años después sabemos más sobre algunos temas y se han realizado trabajos considerables para profundizar nuestros conocimientos en esa área. La introducción del concepto de sostenibilidad en la estructura del comercio global, y después en otros instrumentos de gobernanza comercial, resultó un acierto. Aunque han surgido muchas tensiones desde la Cumbre de Río, la mayoría de ellas se han solucionado en el nivel del Órgano de Apelación del mecanismo de solución de diferencias de la OMC sobre la base de tratados no comerciales o mediante la aplicación de principios de sostenibilidad. No obstante, no todo es "color de rosa" y algunas cuestiones ambientales cruciales siguen representando un desafío para los sistemas de integración económica, principalmente respecto a la protección del planeta frente al cambio climático, la contaminación y la destrucción de hábitats y océanos.

El segundo cambio importante reside en el impacto real y práctico del principio de subsidiariedad, que comenzó a ganar terreno en la época de la Cumbre de Río. Fue un periodo en el cual la sociedad civil empezó a involucrarse en los procesos de la ONU, con más de 17.000 personas y 2.400 representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) que participaron en el Foro de las ONG, organizado en los márgenes de la Cumbre de Río y en la creación de los Grupos Principales que reconocieron que el triunfo del desarrollo sostenible requiere la participación total de todos los sectores de la sociedad.

Al mismo tiempo, la Unión Europea estaba en proceso de negociar el Tratado de Maastricht que, entre otros cambios, consagró formalmente el principio de subsidiariedad en el proceso legislativo del bloque. Todas estas iniciativas se ligaban a las discusiones a nivel mundial y las alimentaban. La gobernanza global y regional, en su definición de una dirección común, cada vez más se apoyaron en las sugerencias de los actores, y su puesta

Una breve historia

1944: Firma del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) por 23 Estados en Ginebra, Suiza.

1972: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, Suecia.

1992: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil.

1994: Fin de la Ronda de Uruguay y posterior creación de la OMC.

2000: Adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

2012: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20 en Río de Janeiro, Brasil.

2013: Adopción de un conjunto de resultados tras la 9ª Conferencia Ministerial de la OMC en Bali, Indonesia.

Julio 2015: III Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo en Adís Abeba, Etiopía.

Septiembre 2015: Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Diciembre 2015: 21ª Conferencia de las Partes para la adopción de un nuevo régimen climático y 10ª Conferencia Ministerial de la OMC en Nairobi, Kenia.

en marcha de igual forma llamó cada vez más la atención de instituciones próximas a ese nivel.

Finalmente, hace dos décadas, la OMC se percibía como una estructura universal y decreciente (*top-down*). Nació como una estructura piramidal de gobernanza del comercio, con los principios, normas e instituciones del GATT en la cúspide, teniendo presencia por encima de los demás acuerdos comerciales regionales, bilaterales y otros y de las normas de política nacional.

No obstante lo anterior, la centralización de la OMC se ha visto fuertemente cuestionada en los últimos años, pues los foros de decisión de políticas comerciales han evolucionado en distintas direcciones. En aras de una integración más o menos profunda, muchos países se han situado de forma selectiva en nuevos acuerdos, optando por diferentes velocidades de interacción con los mercados globales.

Las oportunidades creadas por la evolución de las tecnologías de información, de la comunicación y el transporte y por la apertura de mercados se han traducido en nuevas formas de organización de la producción dentro de redes internacionales. Como resultado surgió la gobernanza de la interdependencia económica del comercio, fuera de la OMC, un régimen complejo para el comercio y la inversión.

Hoy en día, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como el documento final de la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo, que tuvo lugar en julio de este año, llaman manifiestamente a adoptar una dirección común en las políticas nacionales y las políticas económicas, sin querer ser demasiado prescriptivas.

Se ha establecido una dirección general, dejando un margen para autorizar diferentes maneras de avanzar. Una de las dificultades para implementar este nuevo programa consistirá en hacer la distinción entre los aspectos que tengan la vocación de servir de referencia para las políticas nacionales y aquellas que se relacionan con nuevas modalidades de compromiso para la cooperación internacional. Los primeros comprenden, por ejemplo, la cuestión sobre saber si los países cumplirán con los objetivos y si ajustarán sus políticas en caso de no lograrlo. Los segundos tienen que ver con las obligaciones y el papel de cada uno para asegurar que todas las naciones, de manera colectiva e individual, alcancen estos objetivos al tiempo que igualmente se preocupan por los problemas globales.

El régimen de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) –una de las tres convenciones que surgieron de la Cumbre de Río– especialmente ha visto evolucionar su estructura. En 1992 no quedaba claro lo que pasaría con el cambio climático pues los aspectos científicos de esta cuestión todavía no estaban bien comprendidos. La articulación en la primera conferencia de las partes de la CMNUCC en Berlín en 1995 del principio de responsabilidad común pero diferenciada, influenciada por la curva de Kuznet y materializada a través de la división del mundo en los anexos I y II, influenciada atrasó varios años la cooperación para solucionar problemas climáticos.

Ahora que la ciencia está mejor establecida y más ampliamente aceptada, parece claro que se necesita una amplia participación en la lucha contra el cambio climático y deben encontrarse nuevas formas para manejar la responsabilidad histórica diferenciada para la acumulación de GEI en la atmósfera. La dinámica del crecimiento de China y de las emisiones significativas de otros países en desarrollo indican que la división entre los países desarrollados y en desarrollo, según lo previsto en el Protocolo de Kioto, ya no es viable.

El desafío consiste sobre todo en encontrar cómo una combinación particular de las políticas de comando y control, mecanismos de mercado y los cambios de comportamiento pueden ayudar a lograr una economía cuyas emisiones de carbono sean bajas o nulas. Una meta difícil, que requerirá una arquitectura económica global favorable. Nos dirigimos en este momento a un nuevo régimen post-2020, que será definido en París y es probable

que se componga principalmente por compromisos nacionales climáticos, definidos voluntariamente por cada país. La pregunta básica es si en este proceso ascendente (*bottom-up*), que se basa en la subsidiariedad, será suficiente para lograr nuestro objetivo común.

Garantizar el progreso a futuro

Un elemento importante para lidiar con las tensiones entre convergencia y divergencia –o entre universalidad y subsidiariedad– reside en la aplicación de sistemas adaptados en materia de vigilancia, de seguimiento y examen en todos los niveles. La selección de indicadores apropiados, capaces de reflejar la complejidad y que pueda ventilarse a nivel global, será importante. Esta selección puede contribuir a la implementación de una gobernanza basada en principios comunes, pero articulada por temas, acuerdos y una cooperación entre países de forma muy subsidiaria. La supervisión y la revisión de los compromisos son las únicas herramientas válidas para verificar que las promesas internacionales y las nuevas modalidades de compromiso se materialicen.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible exigirá indicadores apropiados para medir el progreso y ayudar a los Gobiernos a gestionar la complejidad de la implementación de un marco de trabajo que entrelace las tres dimensiones del desarrollo sostenible a través de muchos ámbitos políticos. Afortunadamente, el trabajo teórico y académico sobre la medición de desarrollo ha cambiado la manera en que los países tienden a evaluar el bienestar humano en el contexto de prioridades sociales y del ambiente natural

Las últimas décadas han visto una creciente voluntad de mirar más allá del producto interno bruto per cápita, que hasta ahora se ve a menudo como única medida de desarrollo. En el Informe sobre Desarrollo Humano, publicado anualmente desde 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que resume un conjunto de indicadores de desarrollo por país, incluyendo entre otros los niveles medios de educación, ingresos y esperanza de vida. Sin embargo, el IDH inicial ignoraba las medidas de sostenibilidad ambiental debido al escepticismo del economista que lo diseñó. Esto ha cambiado con la aparición de una serie de nuevas medidas multidimensionales, incluyendo el índice de bienestar de la OCDE, el Informe sobre Felicidad Mundial liderado por Jeffrey Sachs, el Índice de Progreso Real (IPR), los Indicadores sobre Gobernabilidad Sostenible de Bertelsmann Stiftung y el Índice de Desempeño Ambiental de la Universidad de Yale.

En la OMC se sugirió que el trato especial y diferenciado debe ser abordado y medirse en términos de desarrollo sostenible. El simple hecho de otorgarle a los países en desarrollo unos años adicionales para aplicar las políticas y el acceso preferencial a los mercados no necesariamente les permite responder a las dificultades multidimensionales que enfrentan sus economías, el impacto del comercio sobre recursos naturales nacionales o los efectos de las diferentes políticas ambientales sobre el comercio (véase [Meléndez-Ortiz y Dehlavi, 1998](#)).

La implementación de la Agenda de Desarrollo post 2015 necesitará en última instancia que las normas de comercio sean articuladas en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. De nuevo, será útil disponer de indicadores sobre el grado en que las reglas se dirigen a la dirección correcta o utilizar índices compuestos. No obstante, el establecimiento de un sistema de ese tipo sigue siendo muy difícil.

La ventaja del nuevo régimen climático es el hecho de que ya existen las medidas e indicadores de gran parte de aquello que los países tienen la intención de lograr. La comunidad internacional cuenta con métodos relativamente sofisticados para entender dónde y cuándo se generan GEI, además de cómo contribuyen al aumento de la temperatura global, la acidez de los océanos, entre otras situaciones. Para el periodo posterior a 2020, los países tendrán compromisos específicos de reducción individuales, en la mayoría de los casos con diferentes líneas base, aunque de todas maneras sigue siendo posible entender cómo estos esfuerzos se suman.

No obstante, parece probable que la suma de los compromisos nacionales en materia climática no sean un esfuerzo suficiente de mitigación para mantener la temperatura mundial dentro del límite máximo de calentamiento de dos grados centígrados. También es posible que algunos países no estén cumpliendo sus compromisos. ¿Qué sucedería si la situación de uno de los principales emisores cambia drásticamente? Una crisis económica importante, por ejemplo, podría detonar un replanteamiento de las políticas climáticas. Deben por lo tanto ponerse en marcha medidas de salvaguardia para ayudar a los países a enfrentar las circunstancias cambiantes.

Junto a la estrecha supervisión de las políticas adoptadas por los países para implementar sus compromisos, debe preverse una especie de "asesoría" para ayudar a los países a comprender y gestionar mejor la transición hacia una economía baja en carbono. Muchos observadores suelen atribuir el "éxito" de su sistema comercial a su naturaleza contractual, al mecanismo de solución de diferencias y a la supervisión continua de las políticas comerciales. Pero otra dinámica importante también entra en juego.

El sistema comercial funciona y se lleva a cabo ya que está sólidamente anclado a los intereses propios de sus actores. Si se aplica esta lógica a la materia climática, habrá que revisar aquello que los tomadores de decisiones comprenden como interés de todas las partes involucradas de continuar implementando los compromisos climáticos, incluso si cambian las circunstancias.

Encontrar los sistemas adecuados

La gobernanza global consistirá siempre en encontrar un equilibrio entre la definición de políticas en el plano global, la vigilancia del papel continuo de liderazgo de las políticas gubernamentales y la asistencia del gobierno en la implementación subsidiaria de compromisos. La alineación de las políticas nacionales tendrá que absorber los costos de transacción de la negociación de los principales acuerdos internacionales. En una economía interconectada, la implementación de dichos acuerdos también depende en parte de los negocios, de la tecnología y de la capacidad de explotar el potencial de los mercados globales bien regulados. Asegurarse que los sistemas de comercio y de inversión estén al servicio del desarrollo sostenible también tomará más tiempo, pero probablemente debería lograr mucho más que el financiamiento de proyectos específicos.

Los sistemas comerciales y de inversión podrían jugar un papel importante en los años venideros. Las reglas de comercio e inversión podrían ser el catalizador más grande para el cambio debido a su poder transformador del modo en que funcionan las economías y la forma en que millones de personas viven sus vidas. Debemos asegurarnos en todo momento que las normas comerciales, ya sean definidas a nivel global o regional, favorezcan claramente los resultados en materia de desarrollo sostenible. Se necesitan indicadores fiables y medidas de control, bajo una óptica de desarrollo sostenible, para supervisar el impacto de esas reglas no solamente sobre la actividad económica, sino también sobre el medio ambiente y la sociedad en general.

Para poner en acción el financiamiento para el desarrollo de Naciones Unidas, el marco de trabajo post 2015 y el régimen para combatir el cambio climático se necesitarán esfuerzos continuos para adecuar los sistemas de comercio e inversión y también para darle soporte a una economía saludable que brinde bienes sociales, ambientales y económicos.

A fin de cuentas, serán las políticas, útiles para impulsar los cambios sistémicos necesarios en la economía global, y no el financiamiento como tal, las que desempeñen un papel crucial en el apoyo al crecimiento sostenible e inclusivo en las siguientes décadas. El camino es claro: no es el dinero, sino las políticas y sus marcos de trabajo e instituciones que las implementan las que constituyen una poderosa herramienta de cambio.



Ricardo Meléndez-Ortiz
 Director ejecutivo, International
 Centre for Trade and Sustainable
 Development (ICTSD).

CRECIMIENTO VERDE

Crecimiento verde: el caso de Costa Rica

Álvaro Cedeño Molinari

Costa Rica ha avanzado de manera considerable y ejemplar en su crecimiento sostenible. De ser un país primario exportador, hoy la mayor parte de su crecimiento se debe a los servicios, lo que ha estado acompañado además de diversas iniciativas por promover un crecimiento armonioso con la naturaleza.

Durante la primera mitad del siglo XX, Costa Rica sufrió la masiva tala de sus bosques, los cuales poseían ricas y antiguas maderas. Además, la frontera agrícola de la época invitaba a "abrir montaña" para extender terrenos para la producción económica.

Hacia fines de la década de 1960, un grupo de ciudadanos, preocupados por los cambios que estaba sufriendo el territorio y el clima nacional debido a la deforestación, propusieron lo que llegó a convertirse en la primera Ley forestal del país. Aun con ella, durante diez años más continuó perdiéndose la cobertura boscosa y afectándose los ecosistemas locales y la biodiversidad que albergaban. Se calcula que, para fines de la década de 1970, los bosques de Costa Rica cubrían apenas 26% del territorio nacional, habiéndose reducido significativamente del 80% cubierto a inicios del siglo pasado.

A partir de ahí, el bosque costarricense inició su recuperación debido, en parte, al establecimiento de políticas públicas que incentivaban la protección de los bosques y a un crecimiento económico menos vinculado al uso de la tierra. Durante la década de 1980 se creó el concepto de pago por servicios ambientales, el cual promovía un esquema de pagos por medio del cual los usuarios y beneficiarios de un determinado ecosistema pagaban una retribución a los dueños de propiedades aledañas al ecosistema con la condición de que lo preservaran en su estado natural. Las comunidades que utilizaban un determinado río, por ejemplo, pagaban un pequeñísimo canon que sería trasladado a los propietarios de tierras cercanas a las nacientes del río.

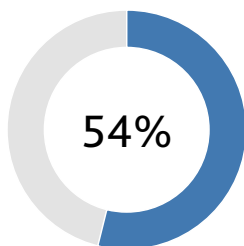
Este esquema se convirtió en una innovación de política ambiental que promovió la participación privada en la preservación de la naturaleza y coadyuvó con los esfuerzos estatales por conservar bosques y demás ecosistemas en la forma de parques nacionales y reservas biológicas (véase Chaves y Lobo, 2000; Fonafifo) y se ha convertido en un modelo de diseño de políticas públicas ambientales a nivel mundial.

Lo más importante de este mecanismo es que, a largo plazo, le ha permitido a Costa Rica acompañar su crecimiento económico con un crecimiento ecológico de forma paralela, o sea, un verdadero crecimiento económico verde.

El capital natural

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha llamado vehementemente la atención hacia el diseño de mecanismos de medición de la prosperidad que "reconozcan el papel del capital natural en el crecimiento económico y el bienestar humano" (véase OCDE, 2015).

Toda riqueza económica, toda monetización financiera de un bien o servicio, todo proceso industrial tradicional e innovador está estrechamente vinculado a la naturaleza. En pocas palabras, todo insumo productivo proviene de la naturaleza. Ya sea una materia prima renovable (agua, madera) o no renovable (cobre, petróleo) o un derivado de recursos naturales (energía hidroeléctrica o eólica) y todo bien material que se emplee en la generación de riqueza económica (computadora, papel, llanta de vehículo) tiene su origen en el ecosistema natural. A pesar de que resulta obvio realizar esta breve explicación, no es evidente que se incorporen al análisis de costos y beneficios las externalidades negativas



fue la reducción de los bosques de Costa Rica desde inicios del siglo XX a la década de 1970, cubriendo en aquella época solo el 26% del territorio frente al 80% inicial.

ambientales que tiene la obtención y utilización de recursos naturales en procesos productivos.

Esto implica que conforme se degrada y disminuye el capital natural del planeta, se reduce igualmente la capacidad de generar riqueza por medio de la productividad económica. Esto lo supieron muy bien comunidades antiguas que colapsaron por agotar las fuentes naturales de recursos en los que estaba basado el florecimiento de sus culturas. Se cree que los Mayas, indígenas que prosperaron desde hace 1500 años en América Central y aportaron elementos astronómicos al calendario que se utiliza en la actualidad, entre otros aportes a la civilización humana, debieron migrar a otras tierras y se desintegraron como cultura dominante debido a la pérdida de cobertura boscosa. Similar destino vivieron los habitantes de la Isla de Pascua, que utilizaban troncos de los árboles para transportar y elevar sus impresionantes moai, esculturas de piedra, hasta que cortaron el último árbol y colapsó la cultura en la isla ([American Scientist, 2006](#)).

Según el [Global Footprint Network](#), desde 1985 el planeta consume más recursos naturales de aquellos que los ecosistemas pueden naturalmente restaurar. El problema es cada vez mayor, lo cual significa que se reduce, año a año, el capital natural del cual se deriva el capital financiero con el que medimos el desarrollo, el crecimiento, el comercio y el progreso económico.

Este índice de medición de huella ecológica determina que cada ser humano debería consumir, en promedio, recursos naturales producidos en poco más de dos hectáreas biológicamente activas a lo largo del año. Muchos países se encuentran por debajo de ese promedio y son los países de menor desarrollo. Hay otros países que exceden dicho nivel, lo cual está muy correlacionado con niveles de consumo altos. Costa Rica se encuentra apenas por encima de ese estándar. Con ello, refleja un nivel nacional de producción y consumo económico promedio casi en línea con la capacidad del planeta de restaurar lo producido y consumido.

Esto brinda claridad al diagnóstico del conflicto y obliga a lanzar la pregunta estratégica: ¿de qué manera se podría acrecentar el capital económico en paralelo a acrecentar el capital natural? Mejor aún, ¿de qué manera se podría alcanzar un crecimiento económico neto que aportara más al medio ambiente de lo que este se toma?

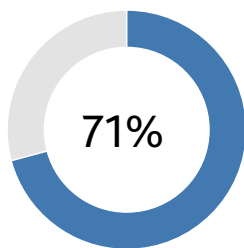
Desarrollo regenerativo

Cuando se iba a celebrar la cumbre Rio+20 de la Organización de las Naciones Unidas, resonó una cita, hoy mundialmente reconocida, respecto a que el modelo de desarrollo más ejemplar en el último medio siglo había sido el de Costa Rica, pues había logrado triplicar su producto interno bruto en paralelo a duplicar su cobertura boscosa, todo en el transcurso de 30 años. Ello dio cabida al concepto de desarrollo regenerativo para referirse a un modelo de desarrollo que tuviera como norte la obligación ética y política de crecer en ambos frentes: el económico y el ecológico.

Sería difícil afirmar que esta tendencia de crecimiento verde ha sido planificada. Lo que sí es cierto es que se ha planificado la recuperación del capital natural a partir de políticas de reforestación, conservación de ecosistemas y clasificación de la biodiversidad del país. Asimismo, se ha planificado una política comercial que ha conducido la economía del país en una dirección que avanza hacia el mayor valor agregado, la calidad y el mayor acceso a mercados.

En la discusión actual sobre crecimiento verde, Costa Rica puede bien ser un modelo a seguir, con la advertencia de que el éxito alcanzado es más el resultado de esfuerzos paralelos por desarrollar áreas que no necesariamente son incompatibles: la economía y la ecología.

Es importante mencionar que la productividad nacional ha tenido una transición acelerada, provocando un impacto positivo en el uso de la tierra. Mientras que hace 50 años el 85% del producto interno bruto costarricense estaba basado en la agricultura, hoy



del actual PIB de Costa Rica depende de los servicios. Hace 50 años atrás, el 85% del PIB estaba basado en la agricultura.

el 71% depende de los servicios. El cambio en el peso de la economía hacia los servicios no ha implicado que hayamos abandonado al sector agrícola; al contrario, el país modernizó sus prácticas agrícolas y abordó nuevos productos y mercados, con lo que hoy más del 24% de nuestras exportaciones corresponden a productos agrícolas.

Las nuevas industrias, aunque pudieran considerarse intensivas en el consumo energético, tienen una reducida huella ecológica respecto al capital natural, sobre todo considerando que casi la totalidad de la electricidad costarricense proviene de fuentes renovables a lo largo del año. Existe además, desde hace casi dos décadas, un mecanismo impositivo por medio del cual se transfiere un canon del pago de combustibles hidrocarburos al fondo nacional para el financiamiento forestal. Todo ello implica esfuerzos hacia una economía baja en emisiones de carbono.

En el transcurso de los últimos 60 años el país ha avanzado en su meta de alcanzar un desarrollo humano y un crecimiento económico que sea armonioso con la naturaleza. En la década de 1950 se fundó el Instituto Costarricense de Electricidad, el cual está a escasos dos años de alcanzar 100% de generación eléctrica renovable. En la década de 1960, como ya se mencionó, se creó la Ley Forestal. Durante la década de 1970 se protegieron grandes extensiones de bosque, manglar y costa para crear Parques Nacionales y convertirse en el país que tiene la mayor proporción de su territorio en áreas protegidas. En la década de 1980 se ideó el pago por servicios ambientales ya referido. En la década de 1990 se estableció el impuesto a los combustibles para financiar la reforestación. En la década de 2000 se declaró una moratoria para toda actividad extractiva del subsuelo y se lanzó la ambiciosa meta de convertirse en un país carbono-neutral. Aún así, queda mucho camino por recorrer.

Un experimento

Durante la pasada administración de la presidenta Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por el Dr. René Castro Salazar, tuvo la iniciativa de realizar un experimento diplomático que consistió en otorgar un mandato especial a la Misión costarricense en Tokio, Japón, para establecer una agenda bilateral de crecimiento verde.

El ejercicio pionero inició por la identificación de áreas de desarrollo en ambos países que tuvieran la posibilidad de crear valor compartido. Se identificaron, por lo tanto, energías renovables, biocomercio, turismo ecológico y ciudades inteligentes como las principales áreas de trabajo.

La receptividad del Gobierno japonés fue clave para atender una iniciativa de un país como Costa Rica que, según los mismos japoneses, se había "graduado" de la cooperación asistencial. Así las cosas, resultaba de particular importancia reconfigurar el paradigma de cooperación entre ambos países.

Los resultados han sido positivos y promisorios. Japón otorgó un crédito blando de US\$ 750 millones para desarrollar tres nuevas plantas geotérmicas en Costa Rica. También se crearon dos líneas de crédito por US\$ 50 millones para financiar la sustitución de taxis públicos en Costa Rica por vehículos bajos en emisiones, así como cualquier otra tecnología cuya sustitución resulte en una reducción en emisiones. Luego, se firmó un mecanismo de intercambio de créditos de carbono (*Joint Crediting Mechanism*) por medio del cual el gobierno japonés participa activamente en la modernización tecnológica de industrias costarricenses para la reducción de emisiones. Finalmente, se gestionó con éxito la designación del Instituto Nacional de Biodiversidad como Premio Planeta Azul, otorgado en 2014.

Más allá de todo lo alcanzado, se ha impulsado una mayor divulgación de información para turistas japoneses interesados en aspectos de la naturaleza y se han promovido acercamientos en biocomercio desde el punto de vista empresarial, político y académico, aprovechando la biodiversidad costarricense y el inmenso mercado japonés en dicho sector.

A partir de ahí, el siguiente gran desafío será impulsar esa agenda diplomática hacia otros destinos con los cuales existe potencial de creación de valor compartido. También es necesario identificar mecanismos globales que permitan establecer alianzas sinérgicas y transversales entre regiones y entre los sectores público y privado que de forma tal que se conserve el capital natural existente y se acrecente en el futuro.

A semanas de la 20ª Conferencia de las Partes sobre cambio climático a realizarse en París, Christiana Figueres, costarricense que lidera las negociaciones a nombre de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, busca afanosamente la manera de crear un fondo climático de US\$ 100 mil millones anuales para invertir en mitigación y adaptación al cambio climático.

Una idea que surgió en el marco de la agenda bilateral con Japón fue la de reducir en un 7% el gasto armamentista mundial, actualmente en el orden de los US\$ 1.5 billones, lo que equivaldría a los US\$ 100 mil millones que el mundo necesita urgentemente para hacer frente a la lucha contra el cambio climático y así financiar dicho fondo. Lo cierto es que de poco servirán los ejércitos si se llegan a dar las peores consecuencias que la ciencia climática prevé para mediados de siglo. Sería mejor gastar eficazmente en transformar el conflicto atendiendo sus causas y adaptándose a sus consecuencias más previsibles. Sería, claramente, una política incuestionable de crecimiento verde.

Consideraciones finales

Para el año 2050, la inmensa mayoría de los trabajadores actualmente activos estarán retirados. El planeta del futuro será lo que se diseñe y se decida hoy. Los niños de hoy y los que aún no nacen asumirán las consecuencias del proceder actual. De ahí la enorme importancia que tiene pensar creativamente en el diseño de escenarios futuros prósperos donde se logre viabilidad para toda la vida en la Tierra.

Costa Rica ha creído que preservar la vida es lo primordial como nación civilizada. Por eso abolió sus fuerzas militares hace más de 65 años. Por eso fue pionera en turismo ecológico, clasificación de biodiversidad, carbono-neutralidad y agenda diplomática de crecimiento verde.

Vale la pena estudiar también lo que están intentando otros países para promover un crecimiento económico verde. La República Popular China, por ejemplo, recientemente anunció un proyecto de venta de bonos verdes sustentados en la venta de derechos para el uso de recursos naturales. Esta es una manera de ampliar y estructurar financieramente el pago por servicios ambientales que tan buenos resultados le ha dado a Costa Rica.

Está claro que el futuro hay que reinventarlo, que el nuevo paradigma económico es también ecológico y que está alcance de todos los países, comunidades y empresas por medio de la innovación tecnológica, social y política.



Álvaro Cedeño Molinari
Embajador de Costa Rica ante la
OMC y OCDE.

CRECIMIENTO VERDE Y NEGOCIOS INCLUSIVOS

El crecimiento verde y la implementación de negocios inclusivos en Colombia

María Alejandra Pineda-Escobar

Partiendo del reconocimiento de la validez del crecimiento verde e inclusivo como estrategia de desarrollo para los países de América Latina, el artículo presenta una reflexión en torno a la experiencia colombiana en la implementación de negocios inclusivos y las lecciones que los tomadores de decisiones pueden obtener y así encaminar a los países latinoamericanos hacia la sostenibilidad en la base de la pirámide.

El crecimiento verde e inclusivo es un concepto de muy reciente aparición en las esferas académicas y políticas regionales e internacionales y su conceptualización sigue siendo objeto de debate.

Organismos multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial, entre otros, lideran el trabajo desarrollado a la fecha respecto al crecimiento verde e inclusivo. Así, por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) entiende la economía verde como aquella que logra “mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas”.

Dicho de otro modo, una economía basada en un crecimiento verde e inclusivo es aquella que alcanza un crecimiento bajo en carbono, haciendo un uso eficiente de los recursos y siendo socialmente incluyente, por lo que se entiende que el enverdecimiento de la economía, contrario a ser una barrera para el crecimiento, resulta ser un impulsor del crecimiento sano, que permite la erradicación de la inequidad y la pobreza y lleva a los países hacia la senda del desarrollo sostenible.

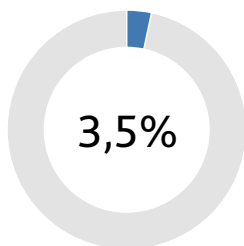
De acuerdo a lo anterior, las estrategias encaminadas al logro de un crecimiento verde e inclusivo deberán afrontar los problemas del desarrollo de manera holística, aunando los esfuerzos de protección y conservación del medio ambiente junto con el logro del bienestar económico y la equidad social. El desarrollo de negocios inclusivos, o negocios sostenibles con la población de la Base de la Pirámide,¹ se presenta como una innovadora respuesta que desde el mercado permite diseñar estrategias para acercar al sector empresarial con el logro de los objetivos de desarrollo con enverdecimiento e inclusión (Pineda-Escobar, 2014).

El complejo y paradójico escenario que ofrece América Latina al continuar siendo, por un lado, la región con mayor inequidad y urbanización del planeta y, por el otro, una región con enormes riquezas ambientales, humanas y económicas con una amplia diversidad biológica y étnica-cultural hacen de sus países un contexto idóneo para la implementación de modelos de negocios inclusivos que tiendan al crecimiento sostenible con conciencia ambiental e inclusión social.

En este contexto, el artículo presenta una reflexión en torno a la experiencia colombiana en la implementación de negocios inclusivos con población base de la pirámide, extrayendo las principales lecciones que puedan ser de utilidad para tomadores de decisión en América Latina.

Colombia y la población base de la pirámide

Colombia, con la tercera población más numerosa en América Latina, abundantes recursos naturales, un ingreso medio-alto y un índice de desarrollo humano alto, es considerada como una de las economías más sólidas y dinámicas en la región. Sin embargo, la distribución de los beneficios de este aparente progreso no se ha dado de manera equitativa a lo largo del territorio nacional y el país continúa teniendo unas elevadas tasas



sería el crecimiento mayor estimado para Colombia durante este 2015, siendo la demanda interna uno de los principales impulsos de su crecimiento. (Cepal)

de pobreza e inequidad. El índice de Gini para el año 2013 se acercaba a los 56 puntos, haciendo de Colombia uno de los países más inequitativos de América Latina y del mundo.

De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística, a junio 2015 el porcentaje de personas viviendo en condición de pobreza monetaria en el país superaba el 28% (lo que equivale a más de 13 millones de colombianos, casi la totalidad de la población de Guatemala), y cerca del 8% se encontraban en condición de pobreza extrema.

Por su parte, el indicador de pobreza multidimensional (IPM) fue de 21,9% para el 2014. Este indicador considera de manera más completa los diversos factores que inciden en la condición de pobreza de una familia, más allá de sus ingresos monetarios, teniendo en cuenta cinco dimensiones: condiciones educativas, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud, servicios públicos y condiciones de la vivienda.

Sumado a lo anterior, en Colombia también son alarmantes los niveles de informalidad en el empleo que han permanecido constantemente cercanos a la mitad de las ocupaciones en el país. Para el trimestre abril-junio de 2015, más del 48,5% de las ocupaciones eran de carácter informal.

Negocios inclusivos como eje del crecimiento verde e inclusivo en Colombia

Desde hace un poco más de ocho años, el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible (Cecodes, capítulo colombiano del WBCSD), viene promoviendo y liderando la adopción de modelos de negocios inclusivos por el sector empresarial colombiano, de manera que sus estrategias de responsabilidad social empresarial puedan estar direccionadas a la generación de valor económico y valor social para la empresa y para las poblaciones vulnerables.

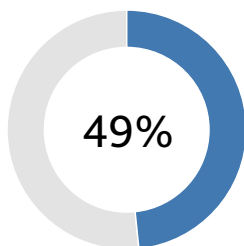
Los negocios inclusivos son estrategias empresariales que, bajo una lógica de mutuo beneficio, buscan empoderar a las poblaciones de bajos ingresos vinculándoles en la cadena de valor de las empresas como consumidores, proveedores, distribuidores o socios empresariales, generando rentabilidad empresarial y mejoras en la calidad de vida de la población (Pineda-Escobar, 2013). De esta manera, los negocios inclusivos logran ir más allá de los esfuerzos puramente filantrópicos o asistencialistas al convertirse en respuestas de mercado que permiten a las empresas vincularse con el alivio de la pobreza desde su saber-hacer.

A la fecha, la mayoría de las experiencias de negocios inclusivos en Colombia se han dado en el sector rural, existiendo también una diversidad importante de ejemplos que han tenido lugar en el contexto urbano, en sectores tan variados como construcción, cosméticos, productos de consumo masivo y servicios educativos, entre otros.

Si se logran identificar y conectar de manera adecuada las necesidades de los territorios y de la población vulnerable con las capacidades y demandas del sector empresarial, los negocios inclusivos pueden ser un camino apto para la reconstrucción y fortalecimiento del tejido social. Para esto, uno de los puntos de partida indispensables es la construcción de confianza entre el empresariado y las comunidades y el establecimiento de una base sólida sobre la cual erigir la estrategia empresarial.

Un caso particularmente ilustrativo e innovador lo constituye el proyecto denominado "Desarrollo Territorial Inclusivo" (DTI) el cual, de la mano del Cecodes, se ha desarrollado en la región de los Montes de María (departamentos de Bolívar y Sucre) desde mediados del año 2011. El proyecto vincula a cerca de 200 familias campesinas de la región a través de la combinación de cultivos de corto, mediano y tardío rendimiento, quienes tienen garantizado el mercado para su producción a través del convenio con las empresas ancla participantes en el proyecto.

Los Montes de María es una región de particular interés al interior del país, toda vez que constituye uno de los territorios más golpeados por el flagelo de la violencia interna, en particular durante los años 90. Tal bagaje histórico hace que, por un lado, la región haya



de las ocupaciones en Colombia durante el trimestre abril-junio de 2015 fueron de carácter informal. (DANE)

sido foco constante de ayudas de orden asistencialista y, por el otro, implica un reto mayor en la construcción de confianza con las comunidades.

Dos lecciones en este proceso se pueden destacar: primero, la importancia de brindar un acompañamiento psicosocial a lo largo del proceso, dado que además de la generación de ingresos, los proyectos de negocios inclusivos deben también ayudar a la generación de dinámicas sociales que permitan el restablecimiento del tejido social; segundo, las comunidades deben ser entendidas –y deben verse a sí mismas– como sujetos activos que se involucran directamente en la construcción y ejecución de los proyectos para ver sus resultados.

El empoderamiento es fundamental al permitir que las comunidades se reconozcan como participantes activos en su propio proceso de salir de la pobreza y no solo como sujetos pasivos receptores de apoyos filantrópicos e intervenciones promovidas por donantes nacionales e internacionales. Es destacable también el aporte de los negocios inclusivos en la formación de una cultura empresarial entre las poblaciones vulnerables.

La cara opuesta de lo anterior plantea que los altos costos de la formalidad –frecuentes no solo en Colombia, sino en América Latina en general– pueden entorpecer la creación de empresas por la población de la base de la pirámide, obstaculizar su efectiva capacidad de vinculación en las cadenas de valor empresariales y minimizar las oportunidades de escalabilidad del negocio inclusivo.

A nivel organizacional, una de las principales lecciones aprendidas a la fecha es la necesidad de reconocer que los tiempos de retorno de la inversión, curvas de aprendizaje y posicionamiento en el mercado difieren ampliamente de la temporalidad promedio que acostumbran las empresas cuando actúan en mercados tradicionales fuera de la base de la pirámide.

Consecuentemente, es necesario que los empresarios con interés en ejecutar negocios inclusivos afronten estos mercados dejando de lado la obsesión con la inmediatez y el corto plazo y planteen estrategias desde una visión de mediano y largo plazo, más acorde con los propósitos mismos de la sostenibilidad.

Por lo mismo, es fundamental la flexibilidad y la apertura al cambio organizacional. Si se retoma el caso del DTI, por ejemplo, la estrategia ha sido planteada desde sus inicios como un proceso que contempla un acompañamiento socio-empresarial por un período de 5 años que pasaría paulatinamente de un modelo de cogestión hacia la autogestión del negocio por parte de las comunidades.

La comprensión de estos y otros obstáculos existentes al interior de las organizaciones para la adopción y escalabilidad de los negocios inclusivos es un campo que ha recibido muy poca atención hasta el momento, tanto a nivel nacional como internacional y que merece la pena ser evaluado con mayor detenimiento para tener una mejor comprensión de estas nuevas estrategias empresariales.

De igual manera, uno de los principales retos que afronta el desarrollo de negocios inclusivos hacia el futuro es lograr integrar de manera efectiva las tres dimensiones de la sostenibilidad –económica, social y ambiental– en su concepción y ejecución.

Cómo lograrlo es la pregunta que yace frente a nosotros. Su respuesta, sin lugar a dudas, deberá incluir un componente de innovación que trascienda las innovaciones puntuales hacia completos ecosistemas de innovación. De lo contrario, el potencial impacto ambiental derivado del desarrollo de modelos de negocios en la base de la pirámide llevará a los países emergentes y en desarrollo por la tradicional senda de desarrollo insostenible que no debemos emular.

Afortunadamente, cada vez son más las iniciativas de base social que recurren a la cocreación de modelos de negocio basados en el uso alternativo de tecnologías de bajo

costo y en el diseño de innovaciones participativas que ven en la colectividad y en la colaboración la nueva forma de gestionar los modelos de negocio. Ligar estas iniciativas a estrategias de negocios inclusivos permitirá encontrar caminos para fomentar el emprendimiento social de una manera más sistemática y eficaz.

Principales recomendaciones

Una de las principales lecciones es que si se quiere lograr una transformación social profunda que ataque las verdaderas causas de la inequidad social en la región y que realmente ayude a la población vulnerable a salir de las denominadas “trampas de pobreza”, la política pública debe diseñar programas integrales que entiendan la pobreza desde una perspectiva multidimensional y, de la misma manera, estén orientados a la erradicación de sus múltiples causas y efectos que sobrepasan la esfera puramente monetaria.

Así, por ejemplo, se debería pensar en la cofinanciación (en modalidad de alianzas para el desarrollo por ejemplo) de estrategias empresariales priorizadas y acordes con la realidad socio-económica del territorio, en oposición al tradicional otorgamiento de subsidios monetarios desalineados que brindan un alivio económico de corto plazo para la población vulnerable, pero que al carecer de coordinación con una estrategia de desarrollo de mediano plazo no generan un impacto perdurable en el tiempo.

La eficacia de las políticas para llevar a una verdadera transformación social dependerá también de la forma en que estas sean diseñadas. Será necesario que sus programas no solo respondan a las necesidades de las comunidades locales, sino que realmente partan de una concepción participativa e inclusiva, surgiendo de un proceso activo de cocreación.

En materia ambiental, en particular frente a los retos del cambio climático, se requerirá –como lo reconoce Colombia en sus contribuciones determinadas nacionalmente– que se diseñen políticas tendientes a planificar una economía nacional competitiva, eficiente y productiva que a su vez sea resiliente y baja en carbono.

Para esto, el país se encuentra actualmente inmerso en el proceso de elaboración de una Política Nacional de Cambio Climático, sumando a las ya existentes: Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (presente en el país desde el año 2012), la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Uno de los mayores retos será, como sucede con frecuencia, lograr transitar de manera exitosa de la formulación a la implementación de la política con impactos positivos tanto a nivel nacional como local.

De manera similar, se requiere un cambio profundo en la mentalidad de los diversos actores para comprender la utilidad de los modelos colaborativos para la construcción conjunta del desarrollo. Resulta fundamental fomentar alianzas intersectoriales como mecanismo para abordar los problemas del desarrollo en los territorios, pues dada la complejidad de los retos que afrontamos en la actualidad ningún actor está en capacidad de solucionarlos de manera independiente.

Para esto, los tomadores de decisión en Latinoamérica pueden contribuir propiciando la creación y consolidación de espacios multisectoriales de intercambio de lecciones aprendidas y construcción conjunta de iniciativas empresariales y negocios inclusivos.

Tres ejemplos en particular desde el caso colombiano ilustran el desarrollo de estas alianzas intersectoriales y espacios colaborativos de desarrollo empresarial. Primero, desde una agencia gubernamental, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, se cuenta con una dirección de inversión social privada, cuyo rol principal es alinear los esfuerzos de inversión social del sector privado y organismos no gubernamentales (ONG) con los intereses y prioridades de desarrollo que tienen los gobiernos a nivel local y regional, en su caso particular en materia de pobreza extrema.

Segundo, desde el año 2008 y bajo el liderazgo de Cecodes, el Comité Nacional de Negocios Inclusivos de Colombia, el cual paulatinamente se ha consolidado como un espacio de participación multisectorial (sector privado, sector público, cooperación internacional, ONG, academia, consultores independientes, entre otros), en donde se reflexiona en torno a la temática de negocios inclusivos y se intercambian experiencias.

Finalmente, el tercer ejemplo lo constituye el denominado BiDF-HUB² Colombia, iniciativa piloto promovida por la Agencia de Cooperación al Desarrollo Sueca y el Ministerio Holandés de Asuntos Internacionales como un centro de propiedad local para la incubación y fortalecimiento empresarial en alianzas intersectoriales y negocios inclusivos. En el caso colombiano, los actores involucrados seleccionaron un énfasis en el ámbito rural para prevenir o mitigar los efectos del conflicto.

En esta reflexión, es necesario reconocer también que un obstáculo para el avance hacia un crecimiento verde e inclusivo en la región es la falta de liderazgo y voluntad política para su implementación y una falta de confiabilidad ciudadana en la capacidad institucional del gobierno. De hecho, como lo reconocen la OCDE y el Banco Mundial (2010), este no es un problema que aqueja solo a Colombia, sino en general a la mayoría de los países de la región, puesto que los niveles de confianza en las instituciones públicas en Latinoamérica tienden a ser los más bajos del mundo.

Una sólida apuesta por la implementación de políticas de sostenibilidad, junto con mejoras en la confiabilidad en la gestión pública será requerida para afianzar el desarrollo de negocios inclusivos en América Latina. En el seno de tal cambio estará, por ejemplo, un cambio de mentalidad en la ejecución de la política para lograr que las estrategias de sostenibilidad sean concebidas como esfuerzos de largo aliento que sobrepasan los límites temporales de los planes de gobierno, tornándose en políticas de Estado para el largo plazo.

❶ El concepto de la Base de la Pirámide (BdP) fue propuesto por C.K. Prahalad y Stuart Hart a inicios del siglo XXI para referirse al segmento de la población viviendo en condición de pobreza extrema o pobreza relativa, quienes tienen una, varias o todas sus necesidades básicas insatisfechas. De acuerdo con cálculos presentados por el WRI (2007), la población de la BdP a nivel mundial representa 4 mil millones de personas, es decir cerca de 2/3 partes de la humanidad, quienes perciben ingresos menores a USD\$ 8 al día, lo que equivale a USD\$ 3.000 por persona por año en poder adquisitivo local.

❷ Proyectos piloto similares han sido auspiciados en Zambia y Mozambique por los cooperantes.



María Alejandra Pineda-Escobar

Consultora del Centro de Alianzas para el Desarrollo (CAD) y profesora asociada de la Universidad Politécnica Grancolombiano.

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO VERDE

Estrategia de crecimiento verde en Perú: evaluación y retos

Jorge Caillaux y Marcos Alegre

Perú ha tenido un interesante crecimiento económico durante los últimos años, sin embargo, es necesario enfocarse además en sus instituciones para mejorar su desempeño ambiental. Por lo mismo, los autores se preguntan respecto a la estrategia de crecimiento verde y abordan diversas oportunidades posibles de mejorar.

No hay duda que una de las fortalezas de Perú en materia macroeconómica se explica por la continuidad de su política económica de los últimos 20 años y la coherencia entre las funciones y decisiones de sus órganos competentes: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva (BCR).

La disciplina fiscal y la autonomía del BCR en el manejo monetario ha permitido al país crecer a tasas promedio muy por encima de sus pares latinoamericanos a partir de grandes flujos de inversión privada nacional y extranjera que han cubierto parte de las necesidades de la infraestructura productiva, creación de empleo, reducción de la pobreza y aprovechamiento acelerado de sus recursos naturales en un entorno global de mucha demanda, especialmente asociada a la expansión económica de China.

Completa el esquema una agresiva política comercial basada en acuerdos comerciales suscritos con 52 países y la activa participación de Perú en el Acuerdo de Asociación Transpacífico y en la Alianza del Pacífico (véase Fairlie, 2015).

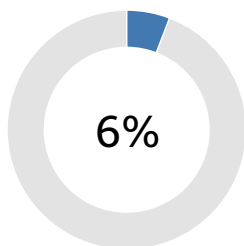
En este contexto, la infraestructura natural y los servicios ecosistémicos han sufrido impactos significativos expresados en el incremento de conflictos socio-ambientales, aun cuando la legislación y la política ambiental han desarrollado instrumentos básicos de prevención y fiscalización similares a otras partes del mundo.

Es evidente que Perú requiere con urgencia consolidar sus instituciones públicas y privadas para mejorar su desempeño ambiental y prevenir los daños y conflictos asociados, especialmente si su geografía, diversidad biológica y cultural y su condición de país muy vulnerable a los efectos del cambio climático exigen decisiones drásticas para corregir errores de una política pública muy influenciada por un liberalismo económico, impulsado por el sector empresarial y que se concentra más en la velocidad que en la calidad del crecimiento. De allí que la estrategia de crecimiento verde y la decisión del país de ingresar al club de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) representan un gran reto cuyo diseño inicial comentamos a continuación.

¿Cuál es la estrategia de crecimiento verde en Perú?

En el 2013, el Gobierno del Perú acordó participar en el proyecto Alianza de Acción para una Economía Verde (PAGE, por sus siglas en Inglés). Dicho proyecto cuenta con una plataforma conformada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de las Naciones para el Desarrollo Industrial, la Organización Internacional del Trabajo y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación, a los cual que se suman los ministerios del Ambiente, Producción, Trabajo y Promoción del Empleo, Agricultura y de Transportes y Comunicaciones. Como Perú está en pleno camino a incorporarse como país miembro de la OCDE, los compromisos que ha suscrito en el contexto de PAGE y OCDE en gran medida motivan y orientan la estrategia gubernamental de crecimiento verde en el país.

La Estrategia Nacional de Crecimiento Verde (ENCV) se está construyendo por la acción conductora e inductora del Ministerio del Ambiente (Minam). No se tiene anunciado un plazo para su aprobación, pero es claro que Perú desea aprovechar su calidad de



ha sido el crecimiento anual de la economía peruana en la última década. (Banco Mundial)

actor funcional de la 20ª. Conferencia de las Partes (COP) y COP21 para mostrar sus compromisos en la materia y acceder a las opciones de cooperación y financiamiento existentes.

En el evento “Conversatorio Internacional sobre Infraestructura Natural”, realizado en Lima entre el 15 y el 17 de setiembre 2015, el Minam presentó un esbozo de la ENCV en diversos frentes de trabajo que resumimos y ampliamos a continuación.

Políticas generales y formulación de la ENCV

Perú está concluyendo un diagnóstico económico y modelamiento de políticas sobre crecimiento verde en sectores priorizados: agroindustria, turismo, bosques, transportes y minería. Esto servirá de base para la formulación de la ENCV que busca generar sinergias con el “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021” y el “Plan Nacional de Acción Ambiental. 2011-2021” (véase Plan Bicentenario). Los temas sombilla de la estrategia son la inclusión social y la competitividad empresarial.

Políticas de protección del capital natural

Las políticas de protección del capital natural que se planea insertar en la ENCV incluyen el direccionamiento de la inversión pública como catalizador del crecimiento verde. El Minam ha aprobado los Lineamientos de Política de Inversión Pública en Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos 2015-2021 que tiene como base una novedosa Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), la cual pretende orientar recursos hacia la conservación y uso sostenible de la infraestructura natural. Dicha ley, además, declara los servicios ambientales que prestan los ecosistemas como patrimonio de la Nación.

Igualmente, está en proceso final una norma reglamentaria que establece el financiamiento de proyectos de manejo integrado de cuencas con una fracción de la tarifa de agua y saneamiento, así como la inclusión de mecanismos de compensación ambiental en los Estudios de Impacto Ambiental a través un esquema “naturaleza por naturaleza”. El énfasis estará puesto en favorecer la implementación de MRSE, brindando apoyo técnico y financiero, especialmente a las empresas que administran el agua, lo que abre un abanico de opciones para alianzas entre el sector forestal y agrícola asociados a las cuencas hidrográficas.

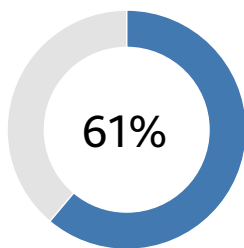
Fomento de mercados verdes a nivel doméstico

La ENCV apunta a fortalecer los mercados verdes a nivel nacional e internacional. El Minam, conjuntamente con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y el MEF, está desarrollando un importante proyecto de compras públicas y ecoetiquetado. Dicho proyecto pretende aumentar significativamente la demanda de bienes y servicios verdes, considerando que el sector público compra aproximadamente el 10% del valor del PBI nacional.

La ENCV pretende modificar patrones de producción y consumo hacia unos más sostenibles. En este sentido, la innovación verde o eco-innovación se considera como una fuente de oportunidad para el crecimiento verde. El Minam lidera un proyecto de eco-innovación con el apoyo del PNUMA que busca desarrollar casos prácticos en sectores industriales priorizados como químicos y metales y al mismo tiempo generar una hoja de ruta para incorporar transversalmente la eco-innovación en las políticas de desarrollo del país.

Mercados verdes a nivel regional

La agro-exportación en el Perú ha sido el gran motor del crecimiento y la productividad agropecuaria de los últimos 10 años, creciendo a una tasa de 8,8% anual, según la Asociación de Gremios de Productores Agrarios. Es un sector fuertemente alineado con estándares internacionales de calidad ambiental y responsabilidad social concentrado especialmente en la costa. La necesidad de competitividad e ingreso a ciertos nichos de mercado exige certificaciones como comercio justo, producción orgánica, FSC para bosques, entre otros.



del territorio del Perú
corresponde a selva amazónica.
Perú además es uno de los 17
países megadiversos, poseedores
en conjunto del 70% de la
biodiversidad del planeta. (IIAP)

En general, las empresas son más sensibles a incentivos o demandas de mercados que a exigencias legales. Si bien las grandes empresas se alinean con estándares de calidad comúnmente aceptados, a nivel de pequeñas y medianas empresas aún impera un alto grado de informalidad y de técnicas de riego insostenibles, especialmente en la costa.

La Sierra peruana viene desarrollándose en función de su potencial para el cultivo de una gran diversidad de productos orgánicos con muy buenos resultados y la incorporación de prácticas agrícolas sostenibles. No obstante, los problemas de la titulación de las tierras y de conectividad con los mercados impiden acelerar su inserción a los mercados nacional e internacional.

Además, la valoración del ámbito culinario tanto tradicional como fusión y su rápida expansión a partir de la gran diversidad biológica y cultural ha significado también riesgos y oportunidades para instalar nuevas prácticas agrícolas más armoniosas y amigables con los ecosistemas, salvo el gran ecosistema marino que todavía sigue siendo aprovechado en algunas de sus especies más comerciales sin la adopción de prácticas sostenibles.

"Perú requiere con urgencia consolidar sus instituciones públicas y privadas para mejorar su desempeño ambiental y prevenir los daños y conflictos asociados... [y] corregir errores de una política pública muy influenciada por un liberalismo económico... que se concentra más en la velocidad que en la calidad del crecimiento."

Las INDC de Perú y el PlanCC

A fines de septiembre de 2015 Perú presentó sus contribuciones determinadas nacionalmente (INDC), comprometiéndose a una reducción del 30% respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero proyectadas para el año 2030 comparadas con el ritmo y tendencia actual de las emisiones nacionales, además de fortalecer sus políticas de adaptación a los impactos del cambio climático.

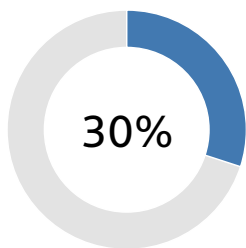
Con bajas emisiones per cápita y totales, solamente 0,3% sobre el total de emisiones globales, de las cuales aproximadamente la mitad se originan en el sector uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura, el reto estará en resolver el grave y creciente problema causado por la deforestación y minería ilegal como se señala más adelante.

Perú está implementando, además, el proyecto "Planificación ante el Cambio Climático" (PlanCC) que busca construir las bases para un desarrollo "limpio" o bajo en carbono. El PlanCC ha permitido diseñar opciones de mitigación sectoriales que se podrían implementar en Perú al 2021 y al 2050; es también parte del programa "Planes de Acción y Escenarios de Mitigación", una colaboración entre Sudáfrica, Brasil, Chile, Colombia y Perú para facilitar la transición de largo plazo hacia economías bajas en carbono.

Un aporte del PlanCC a la ENCV es la formulación de escenarios de mitigación del cambio climático en el Perú al 2050. En contraposición al escenario "business as usual", se plantea un "escenario sostenible" basado en 33 medidas de mitigación de emisiones de carbono en 6 sectores clave: energía, transporte, industria, agricultura, forestal y residuos.

Diversidad Biológica

La Estrategia Nacional de Biodiversidad Biológica cuenta con un Plan de Acción 2014-2018. Esto cobra especial relevancia en tanto Perú es reconocido como uno de los 17 países megadiversos por ser poseedores en conjunto del 70% de la biodiversidad del planeta. De



sería el compromiso de Perú de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2030.

acuerdo con la Ley N° 26839, la Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica es el principal instrumento para la gestión de la biodiversidad en el Perú.

No obstante, la región amazónica, y no solamente Perú, sufre el creciente embate de la minería ilegal que viene arrasando ecosistemas valiosísimos como se documenta en "[Las rutas del oro ilegal. Estudios de caso en cinco países amazónicos](#)", un libro reciente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental que presenta investigaciones realizadas en Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú en torno a la minería ilegal, el comercio del oro y los destinos de este metal cuya extracción está causando graves daños a los bosques de la Amazonía.

¿Cuáles son las oportunidades?

El marco de políticas y tendencias normativas apuntalan oportunidades en la provisión de bienes y servicios en temas como eficiencia de materiales y energía, sin contar con los sectores tradicionales como agroindustria, turismo sostenible, manejo forestal e industria eco-eficiente, entre otros. Algunas señales de mercado dan cuenta de ello.

En Perú existen un número importante de empresas nuevas que se dedican al reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, elaboración de empaques con materiales reciclados, turismo sostenible y exportación de productos orgánicos de la biodiversidad, como la quinua, kiwicha y otros. También existen iniciativas privadas de financiación como el [AquaFondo](#) para proyectos de infraestructura verde aplicados al manejo integrado del agua en las cuencas de Lima y Callao o la Línea de Crédito Ambiental auspiciada por la Cooperación Suiza (SECO).

Se estima que la creciente conciencia de los consumidores peruanos, en especial de la clase media emergente, podría estar dinamizando la provisión de bienes y servicios verdes. Cada día es más frecuente encontrar negocios con productos orgánicos, comercio justo y empresas que adoptan estrategias de sostenibilidad para satisfacer las expectativas de sus accionistas y clientes.

El Pacto Mundial de Naciones Unidas y los Principios de Ecuador para incorporar las dimensiones sociales y ambientales en los negocios y operaciones de financiamiento son asimilados por un importante número de corporaciones. Estas empresas inducen cambios en sus cadenas de suministro en diversas áreas como insumos industriales no tóxicos, tecnologías eco-eficientes, entre otros.

Al evaluar la estrategia de crecimiento verde, un primer desafío será concluir la etapa del proceso de formulación, consenso y compromiso social. La economía peruana ha venido creciendo constantemente en los últimos años. Este escenario plantea el enorme desafío de continuar con el mejoramiento de la calidad de vida de la población y al mismo tiempo preservar el capital natural, reducir la intensidad de uso de materiales, minimizar las emisiones de carbono y estimular la adopción de estilos de vida más sostenibles.

Participación del sector privado y crecimiento verde

Las empresas privadas, especialmente las exportadoras, adoptan el crecimiento verde principalmente por exigencias de los mercados globales en evolución que piden garantías de manejo sostenible de los procesos producción y cultivos. En algunos casos también influye una mayor conciencia del consumidor y las regulaciones ambientales.

Las empresas directamente vinculadas a recursos de la biodiversidad de sectores como el pesquero, agrícola y forestal totalizan exportaciones anuales por alrededor de US\$ 3.500 millones. Esto ocurre con la participación de grandes y pequeñas empresas que normalmente se asocian para exportar. En estos sectores existen innumerables iniciativas de emprendimientos verdes como la comercialización de textiles de camélidos, banano y café orgánico, castaña y miel de abejas, así como turismo rural o eco-turismo dirigidos a mercados nacionales e internacionales que, a su vez, generan altos niveles de empleo local e inclusión social.

Las empresas de manufactura e industria en general, así como de construcción y servicios orientadas a mercados nacionales, empiezan a alinearse a mayor escala con prácticas más verdes conforme las grandes corporaciones o "empresas ancla" lo implementan y, por extensión, lo demandan a sus cadenas de suministro, como proveedores de eco-empaques, tecnologías limpias o energéticamente eficientes. Esto ocurre ya sea para cumplir con políticas corporativas de sostenibilidad o por exigencias propias del rubro de negocio.

La banca privada también cuenta con un sólido marco voluntario suscrito por importantes bancos bajo el título de los Principios del Ecuador, ya referidos anteriormente. La Asociación de Banca de Perú acaba de suscribir con el Minam un acuerdo denominado "Protocolo Verde", que sirve de base para generar procesos voluntarios de enverdecimiento de líneas de crédito y migrar hacia una economía verde en general.

Conclusión

La ENCV está en franco proceso de diseño y puesta en marcha, la cual se articulará con los planes de desarrollo social, económico y ambiental del país. Existen dinámicas públicas y privadas concurrentes con la ENCV, como compras públicas sostenibles, proyectos de eco-innovación, eco-parques industriales y eco-negocios, estos últimos en gran medida basados en la biodiversidad de Perú.

A pesar de las iniciativas privadas existentes, el empresariado en general mantiene aún una posición conservadora respecto a las oportunidades de negocios verdes. El gobierno deberá acelerar la implantación y amplia difusión de los incentivos tributarios y mecanismos de financiamiento para el crecimiento verde, pues está en sus manos crear las condiciones para favorecer el cambio hacia una economía verde. De forma inmediata se puede iniciar con una asignación para negocios verdes proveniente de los fondos disponibles para innovación y tecnología en Perú.

Un tema crucial en la ENCV es la participación de la sociedad civil en el soporte y vigilancia de los avances que le pueda dar al crecimiento verde. En este sentido, la información y empoderamiento de consumidores y el establecimiento de nuevos conceptos de bienestar y prosperidad, así como el cambio de patrones de desarrollo urbano hacia ciudades más sostenibles son temas clave.

El Gobierno de Perú deberá asegurar condiciones apropiadas para la implementación de importantes normas como las referidas a retribución por servicios ecosistémicos, infraestructura verde, inversión pública en diversidad biológica, entre otros.



Jorge Caillaux
Fundador y presidente de la
Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental.



Marcos Alegre
Director del Centro de
Ecoeficiencia y Responsabilidad
Social del Grupo GEA.

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO VERDE

Potencial y desafíos para una estrategia de crecimiento verde en Brasil

Carlos Eduardo Frickmann Young

¿Está Brasil realmente avanzando hacia una economía verde y sostenible o ha sido también parte, como otros países de América Latina, de un proceso de reprimarización? El presente artículo aborda este y otros puntos de interés y plantea que el gigante latinoamericano ha estado avanzando, precisamente, en una dirección contraria al crecimiento verde.

El concepto de "economía verde" puede ser definido como aquel donde el aumento de la actividad productiva resulta en la mejoría del bienestar humano y de la equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y ecológicos (UNEP, 2010). Esto requiere que la economía sea eficiente en el uso de los recursos naturales, incluyendo sus emisiones de carbono, y sea socialmente inclusiva, de modo que las inversiones públicas y privadas puedan generar el crecimiento de los ingresos y del empleo mediante la reducción de las emisiones contaminantes, una mayor eficiencia energética y la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (Young y Scarpeline, 2015).

Por lo mismo, es necesario revertir la actual tendencia del crecimiento predatorio basado en el uso abusivo de los combustibles fósiles y otros recursos naturales que no aborda adecuadamente la marginalización social, la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos. Esto implica cambios en las políticas y en los incentivos del mercado que han contribuido a una mala asignación de capital, permitiendo que externalidades negativas sociales y ambientales conlleven pérdidas significativas en el bienestar de la población (UNEP, 2010).

A partir de lo anterior, ¿es posible caracterizar la trayectoria de la economía brasileña como verde? Hay, sin duda, aspectos positivos: Brasil posee los mayores bosques tropicales que, posiblemente, albergan la mayor biodiversidad del planeta; tiene además una matriz energética donde abundan las fuentes renovables, especialmente la hidroeléctrica y la producción de biocombustibles; presenta una economía diversificada con importante actividad en los sectores agrícola, industrial y de servicios; y en la década del 2000 el país consiguió importantes avances en el área social y en la reducción de la deforestación de la Amazonía.

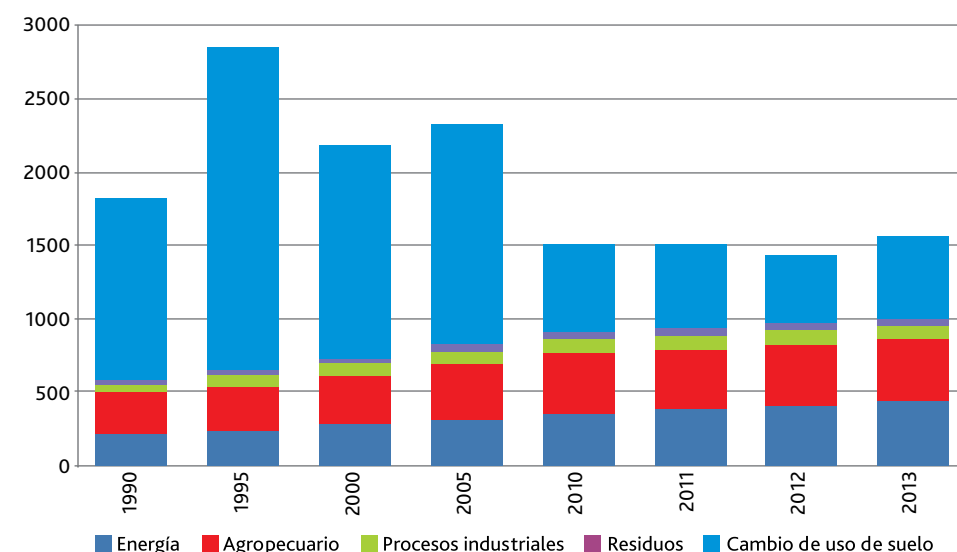
Aun con dichos avances, el presente artículo busca demostrar que Brasil está cada vez más distante de una estrategia de crecimiento basada en los principios de la economía verde y que la creciente especialización en el aprovisionamiento de materias primas para el comercio internacional es un factor importante a la hora de explicar el porqué de este "modelo marrón".

Brasil, ¿rumbo a una economía verde?

Hay que considerar que no ha habido avances significativos en el control de la deforestación después de 2010 y otras fuentes de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) han aumentado considerablemente, como se destaca en la figura 1 para los sectores energía y agropecuario. Lo anterior implica que la posición brasileña se debilitará en los foros internacionales que lidian con los asuntos climáticos debido a que la tendencia de Brasil respecto a las emisiones de GEI irá en aumento.

Además de los problemas globales sobre cambio climático y pérdida de biodiversidad, existen serios problemas socio-ambientales asociados al mismo patrón de especialización en actividades de alto impacto sobre los recursos naturales. Los cambios recientes en la legislación brasileña reducirán los requisitos mínimos de conservación de bosques en propiedades privadas con el fin de maximizar el área disponible para el cultivo y el pastoreo

Figura 1. Evolución por sector de las emisiones brutas de GEI en Brasil, 1990-2013 (MtCO₂e)



Fuente: Azevedo (2015).

y la presión política avanza hacia la reducción de áreas dedicadas a la conservación y a las tierras indígenas. Mientras que dicho proceso de cambio de uso de suelo ocurre en muchas ocasiones con violencia, existen estudios que demuestran una correlación estadística entre la deforestación y el nivel de homicidios, por una parte, y la propagación de epidemias como la malaria, por otra (Sant'anna y Young, 2010; Olson et al., 2009).

Existe también una elevada contaminación por agrotóxicos en las áreas de producción agrícola, con una creciente referencia en la literatura a la incidencia de enfermedades asociadas como el cáncer, especialmente en los trabajadores rurales que están más expuestos (Silva et al, 2005). Esto evidencia la utilización de sustancias opuestas a las indicaciones de seguridad, presentando estadísticas alarmantes para Brasil respecto a la salud humana (Carneiro et al., 2012; Pignati y Machado, 2011).

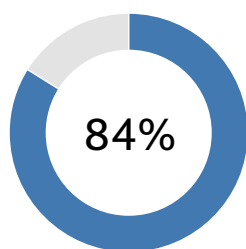
Lo anterior también implica consecuencias para los consumidores. En un estudio de 2013, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria demostró que 36% de 1.628 muestras de productos vegetales comestibles fueron consideradas insatisfactorias por contener agrotóxicos no autorizados por encima de los niveles máximos tolerados.

Otro asunto relacionado es la acelerada difusión de alimentos de origen transgénico. Aun cuando se ha desarrollado una amplia discusión acerca de sus consecuencias, con posibles implicaciones para el comercio internacional, la población brasileña todavía ha concedido poca importancia al tema (Castro et al., 2014).

Cabe destacar que 84% de la población de Brasil vive en áreas urbanas, por lo que la combinación de una inadecuada infraestructura y la falta de disponibilidad de servicios urbanos, junto con una tendencia de concentración de actividades en las áreas centrales de las ciudades han provocado problemas de congestión, contaminación, vivienda y accidentes que aumentan los costos de la sociedad (Young et al., 2014; Young y Scarpeline, 2015).

Sin embargo, la gravedad de los temas expuestos no ha sido acompañada de la debida atención de los gobernantes brasileños de los distintos niveles de la administración, municipal, federal y estatal. La política nacional de protección al medio ambiente fue diseñada sobre la base de instrumentos de comando y control que requieren una activa participación del Estado en el control de las acciones de las empresas e individuos.

No obstante lo anterior, y aun cuando se ha registrado una mayor demanda social por medidas de gestión ambiental debido al aumento significativo de las presiones sobre los recursos naturales y a una mayor concientización de la población sobre el tema, desde el



de la población de Brasil vive en áreas urbanas, lo que ha provocado problemas de congestión, contaminación y vivienda, entre otros, aumentando los costos de la sociedad brasileña.

año 2000 en adelante se percibe una reducción relativa del presupuesto público destinado a la gestión ambiental en todas las esferas del Gobierno (Young et al. 2012).

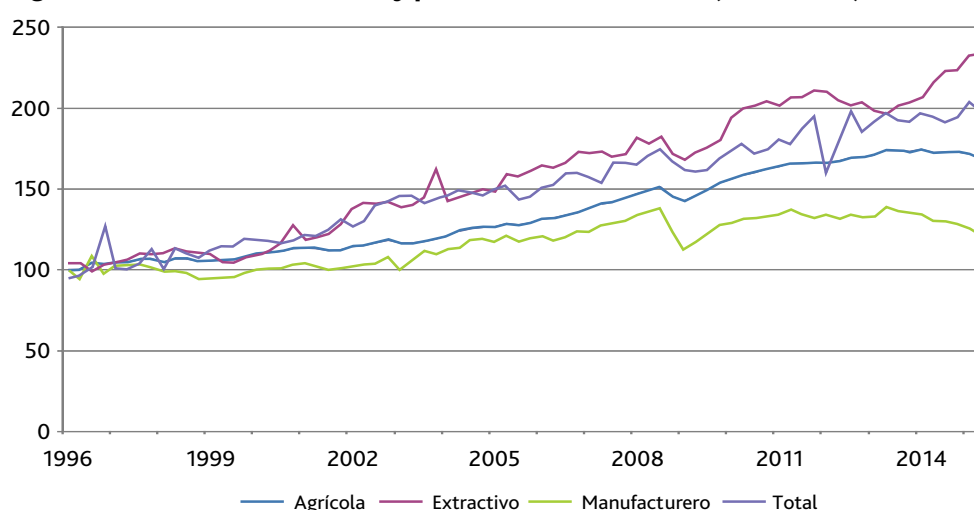
Brasil se enfrenta a una amplia gama de problemas socio-ambientales que mezclan cuestiones típicas de países en desarrollo, como la deforestación y la falta de saneamiento básico, con dificultades más usuales de naciones desarrolladas, asociadas a la pérdida de la calidad de vida debido a la contaminación industrial y al alto grado de urbanización. Precisamente, la próxima sección abordará cómo el patrón de especialización en actividades contaminantes contribuyen a la situación antes mencionada.

Reprimarización de la economía brasileña

Los problemas socio-ambientales presentados en la sección anterior están nítidamente asociados a un creciente modelo de especialización en actividades primarias, en el cual destacan los sectores agropecuario y minero. Este proceso, llamado reprimarización, consiste en el cambio estructural de la composición del producto interno bruto (PIB) y de las exportaciones, en este caso de Brasil, hacia una creciente especialización en productos intensivos en energía y recursos naturales y en actividades de elevado potencial contaminante.

La figura 2 muestra, precisamente, la evolución del PIB total y por sectores seleccionados. Se percibe que la agricultura y la industria extractiva mineral han crecido por encima del PIB total. Por el contrario, la industria manufacturera ha mostrado un desempeño menor.

Figura 2. Evolución del PIB total y por sectores, 1995-2014 (1995 = 100)



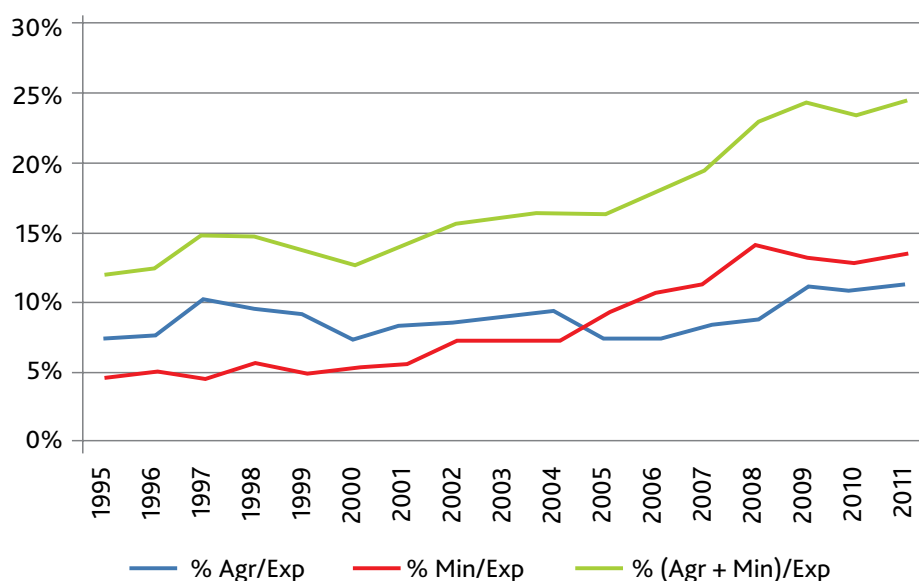
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del IBGE.

La figura 3 muestra que la participación de las materias primas agrícolas y minerales ha aumentado consistentemente en la pauta total de exportaciones desde mediados de la década de 1990, lo que representa en la actualidad más de un cuarto de las exportaciones brasileñas.

La especialización productiva no ocurre solo en materias primas, sino también en productos con alto potencial contaminante en su proceso de fabricación. Este fenómeno se ha identificado en diversos estudios (Young, 1998, 2011; Young y Scarpeline, 2015; Gramkow, 2011) que muestran que en el sector manufacturero las actividades con mejor desempeño son precisamente las de mayor potencial de emisiones contaminantes por unidad de valor producido.

En este proceso de reprimarización de la economía brasileña, la competitividad se basa en un acceso barato a la energía y a las materias primas o haciendo caso omiso de las externalidades ambientales negativas generadas en los procesos de producción.

Figura 3. Participación de las exportaciones minerales y agrícolas (in natura) en las exportaciones totales de Brasil, 1995-2011 (en % del total)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del IBGE.

Lo anterior es el camino opuesto al propuesto por la economía verde, dado que un modelo económico basado en una minería depredadora de los recursos naturales, preocupada por las ganancias de corto plazo, refuerza la exclusión social en tanto los beneficios económicos tienden a concentrarse en un grupo relativamente pequeño, mientras que la degradación ambiental implica graves consecuencias para los más pobres (Young y Lustosa, 2001, 2003).

La creciente especialización en actividades marrón también causa pérdidas en la dimensión económica. El ciclo expansivo de crecimiento de los precios de las materias primas esconde una antigua discusión sobre la tendencia de largo plazo de los términos de intercambio. Las materias primas han presentado una tendencia ascendente desde fines de la década de los 90, aunque se ha revertido en el periodo más reciente, lo que subraya, en el largo plazo, la prevalencia de la hipótesis sobre el deterioro de los términos de intercambio de las materias primas. Hay que recordar que cada vez hay más presiones sobre las actividades donde la competitividad está basada en una relación insostenible con el medio ambiente o con las condiciones de trabajo, lo que coloca en riesgo serio la continuidad de dicho modelo de inserción en el comercio internacional.

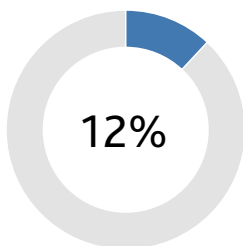
Oportunidades "verdes" para reorientar la estrategia de crecimiento

La sección anterior dio cuenta de que Brasil está enfrentado una tendencia de aumento de la dependencia de los productos primarios y de las exportaciones intensivas en contaminantes. Grupos más conservadores a menudo argumentan que el aumento de los daños ambientales sería un precio necesario para que Brasil asegurase el aumento de la actividad económica.

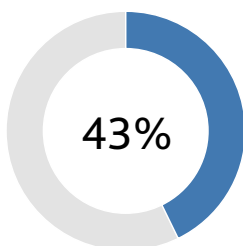
La hipótesis implícita en dicho razonamiento es que la actividad económica y la preservación del medio ambiente estarían necesariamente en oposición y, por tanto, los tomadores de decisiones tendrían que optar entre aumentar el empleo y los ingresos o interrumpir el crecimiento económico a fin de preservar los recursos naturales.

El concepto de economía verde desafía dicha perspectiva y argumenta que las actividades asociadas a la preservación ambiental pueden traer efectos positivos a nivel de empleo e ingresos en el corto y largo plazo.

La explicación es simple: las actividades verdes tienden a ser intensivas en mano de obra y productos manufacturados con mayor contenido de innovación. De hecho, hay una



del agua dulce del planeta, aproximadamente, se encuentra en Brasil. (UNEP)



es el compromiso esperado de Brasil de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2030. (ONU)

relación positiva y estadísticamente significativa entre las empresas industriales que adoptan innovaciones y las que proactivamente adoptan medidas voluntarias de gestión ambiental (Queiroz y Podcameni, 2014).

En contraste, las actividades primarias y de productos potencialmente más contaminantes tienden a ser intensivas en capital, como baja demanda de mano de obra y basan su competitividad principalmente en el bajo costo de las materias primas.

Algunos ejemplos evidencian lo anterior en la esfera microeconómica. En el sector energético, llama la atención el potencial brasileño para generar energía a partir de fuentes alternativas. Brasil posee una amplia experiencia en el modelo de producción de biocombustibles a gran escala. Ciertamente, los factores naturales ayudan: la disponibilidad de tierra, un clima favorable, abundante agua y la exposición a la luz solar favorecen el rápido crecimiento de biomasa. Por lo mismo, los biocombustibles pueden ser considerados como soluciones *win-win* debido a su potencial para reducir las emisiones de GEI, aumentar la actividad económica y disminuir, de manera directa o indirecta, los problemas sociales (La Rovère et al., 2011).

Otra área que puede expandirse en Brasil es la generación de energía a partir del aprovechamiento de las fuentes eólicas y fotovoltaicas. Esto garantizaría la expansión del suministro de energía limpia y al mismo tiempo evita los problemas de nuevas plantas hidroeléctricas, incluyendo cuestiones ambientales y sociales, principalmente relacionados con el desplazamiento de comunidades y problemas económicos relativos a los costos de transmisión debido a las largas distancias entre la localización de las nuevas plantas y los consumidores (Oliveira y Pereira, 2012).

De hecho, en los últimos años ya se percibe una rápida expansión en la producción de energía eólica en Brasil y el mundo. Esto está asociado a una reducción acelerada de costos, redes de distribución inteligentes (*smart grids*) y programas de incentivos específicos, especialmente la adopción de tarifas diferenciadas (*feed-in*) donde los precios más altos se pagan para la introducción de fuentes de energías renovables alternativas (Oliveira y Pereira, 2012).

Un aspecto que es normalmente presentado como negativo para las fuentes alternativas de energía es su baja capacidad de creación de empleo, pero esto no es un problema específico, sino más bien general de todo el sector energético. Las principales oportunidades para la creación de empleo no están en la generación de energía local, sino en la producción de equipo.

Este es un desafío más para el sector en Brasil, pues la proporción de componentes importados continua siendo relativamente alta, mientras que la mayor contribución nacional se sitúa en las actividades de baja tecnología, principalmente en la construcción civil.

Por lo mismo, en vez de establecer precios u otros incentivos para expandir la producción, el énfasis debería estar en el fomento de un sistema nacional de innovación que favorezca el desarrollo de tecnología nacional y el empleo especializado (Podcameni, 2012). Este bien podría ser un tema de discusión en el Acuerdo de Bienes Ambientales, aun cuando Brasil no forma parte de los países involucrados en dichas negociaciones.

Recomendaciones de política pública

La dinámica económica brasileña, basada en la reprimarización y en la expansión de actividades ambientalmente problemáticas, aumentó la presión sobre la baja capacidad de respuesta de las autoridades ambientales. Esto se suma al hecho de que los aspectos ambientales están poco integrados en la formulación de políticas públicas y que existe una enorme carencia de información sobre la extensión e importancia de los problemas derivados de la degradación ambiental. El reciente compromiso de Brasil, por ejemplo, sobre la reducción de GEI no estuvo acompañado por medidas concretas para el financiamiento e implementación de la transición a una economía baja en carbono.

En conjunto, esto conduce a una crisis en la gestión ambiental pública en tanto la percepción del problema crece muy por encima de la capacidad de solución. Por otro lado, el proceso de redistribución de riqueza en Brasil trajo impactos positivos para la generación de empleos y el mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, no es suficiente para garantizar el mejoramiento de las condiciones de vida para alcanzar un desarrollo que sea verdaderamente sostenible. Es más, el actual modelo de reprimarización es incompatible con esta perspectiva de sostenibilidad, por lo que son necesarios cambios mucho más profundos para que dicho desarrollo sea alcanzado en el largo plazo.

La transición a una economía verde crea una oportunidad única para redefinir el rumbo del desarrollo de Brasil. Combinado con los avances en educación, vivienda y ciudadanía en general, la inversión necesaria para esta transformación puede aumentar la actividad económica en el corto plazo y promover una "auténtica" competitividad de los sectores productivos a través de la innovación y la calificación profesional.

Lo anterior requerirá un redireccionamiento de los esfuerzos económicos, actualmente enfocados en el modelo de exportación de materias primas o bienes. La transición diseñada para avanzar hacia una economía verde no tendrá lugar sin reformas estructurales, siendo necesario cambiar el rol del Estado brasileño o el actual marco normativo, lo que podría incluir los tres puntos presentados a continuación.

En primer lugar, debe abordarse la internalización de las externalidades a través de la aplicación del principio el que contamina-paga. Esto podría darse con la implementación de los principios verdes de tributación, penalizando a los contaminantes y subsidiando actividades generadoras de externalidades positivas.

En segundo lugar, deben reorientarse las políticas de compras y adoptarse criterios de sostenibilidad y énfasis en la certificación socio-ambiental. No hay una política orientadora de gastos públicos para favorecer la producción y difusión de productos de bajo impacto ambiental, aun cuando las administraciones públicas son un importante componente de demanda de bienes y servicios en Brasil.

En tercer lugar, deben reorientarse los principios de política macroeconómica, enfatizar la calidad y no la cantidad del crecimiento e incluir principios de tributación verde y de finanzas sostenibles. La concesión de créditos gubernamentales, por ejemplo, garantiza las ventajas de los prestatarios por medio de tasas de interés más bajas y plazos más largos de amortización. Una política consistente con los principios de sostenibilidad debería garantizar dichas ventajas solo a los acreedores que presenten proyectos con beneficios socio-ambientales, mientras que las actividades predatorias no deberían tener acceso a dichas condiciones de crédito.

Solamente con una reorientación en la dirección de las prioridades y de las políticas de estímulo a las actividades productivas Brasil podrá avanzar hacia una economía donde el crecimiento de valor agregado se produzca por el aumento de la eficiencia y de la innovación, con inclusión social y conservación de la calidad ambiental. Esto en vez de la actual estrategia guiada por una competitividad adversa de menor costo y de corto plazo basada en subsidios a la producción agrícola e industrial que mantienen incentivos perversos y que ignoran las externalidades negativas generadas y los costos sociales de largo plazo.



Carlos Frickmann Young
Profesor asociado del Instituto
de Economía de la Universidad
Federal de Río de Janeiro.

ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO

El TPP y la propiedad intelectual: viejos conocidos y nuevos desafíos

Pedro Roffe, Xavier Seuba y Mariano Genovesi

El reciente cierre de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico podría implicar una serie de cambios a nivel de estándares internacionales, pero también a nivel nacional. Por lo mismo, los autores de este artículo abordan el capítulo de propiedad intelectual, una de las áreas más controvertidas del acuerdo en cuestión.

El 5 de octubre de 2015 se oficializó el cierre exitoso de las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) iniciadas en el 2010¹ y que al final de su largo recorrido incluye a 12 países, entre ellos tres latinoamericanos: Chile, Perú y México. Estos tres países tienen una gran experiencia en la celebración de tratados de libre comercio (TLC) que, por definición, van más allá de los estándares consagrados en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El TPP fue desde sus inicios exhibido como el gran acuerdo comercial del siglo XXI. Durante los cinco años de negociaciones el acuerdo atravesó vicisitudes que ponen de manifiesto lo ambicioso y complejo del ejercicio. Para observadores externos, una de las mayores dificultades es analizar el acuerdo y formarse un juicio cabal del mismo solamente a partir de filtraciones de prensa y especulaciones sobre la posición de diferentes actores.

En este contexto, y a la luz de experiencias recientes con el frustrado Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) y la atenta preocupación de grupos organizados de la sociedad civil, uno de los temas más controvertidos del TPP fue desde sus orígenes el capítulo sobre propiedad intelectual (PI), cuya versión final fue publicada por [WikiLeaks](#) el 9 de octubre de 2015.

El contenido del capítulo sobre PI resultaba en cierto modo previsible a la luz de la ambiciosa agenda propuesta por Estados Unidos (EE.UU.) al inicio de las negociaciones. Asimismo, el alcance de los acuerdos suscritos anteriormente por EE.UU. dejaba también poco espacio a la imaginación. En efecto, desde la adopción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, en paralelo al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (Adpic) de la OMC, EE.UU. ha concluido otros 18 acuerdos comerciales preferenciales con potentes capítulos sobre PI, por lo que para todo observador avisado, el TPP tiene su origen en el último acuerdo suscrito con la República de Corea (Korus) en 2013.

Buena parte de la atención y debate iniciales en torno al capítulo de PI se han centrado en las disposiciones relativas a patentes y sobre la protección de los datos que las compañías farmacéuticas y veterinarias presentan para el registro sanitario. De hecho, en las últimas horas de la negociación, el tratamiento de los datos de los productos biológicos atrajo considerablemente la atención de los medios de comunicación. Con respecto a esta materia, se ha dejado entender que existió una concesión importante por parte de EE.UU. que, en primera instancia, abogaba por una protección no menor a 12 años.

Sin embargo, para entender mejor el alcance del capítulo sobre PI es necesario ir más lejos y tratar de entender la magnitud de los aspectos cubiertos por la negociación más allá de dicho capítulo.

Propiedad intelectual en el contexto del TPP

Siguiendo el esquema general del acuerdo por el cual se establece la OMC, los tratados comerciales que siguieron a su adopción, inclusive el TPP, abarcan amplias áreas del comercio tradicional y otros temas relacionados con el comercio. El TPP, en particular,

incluye 30 capítulos, lo que constituye ya una extensión notable si se comparan con los 22 capítulos del TLCAN.

Los capítulos del TPP cubren aspectos comerciales y cuestiones relacionadas con el comercio, entre las que se encuentran: inversiones, servicios, comercio electrónico, contratación pública, servicios financieros, entrada temporal de personas de negocios, telecomunicaciones, comercio electrónico, políticas de competencia, empresas estatales, cuestiones laborales, medio ambiente, cooperación y capacitación, competitividad y facilitación comercial, desarrollo, pequeñas y medianas empresas, coherencia regulatoria, transparencia y anticorrupción y solución de diferencias. Es en este amplio y rico contexto en el que debe analizarse el capítulo sobre PI, aun cuando capítulos como el de inversión extranjera, coherencia regulatoria y desarrollo resultan especialmente pertinentes.

Considerado en sí mismo, el capítulo sobre PI llama la atención por su extensión, que comprende 9 secciones o subcapítulos, entre ellos: disposiciones generales, cooperación, marcas, indicaciones geográficas, patentes y protección de datos, diseños industriales, derecho de autor y derechos conexos, observancia, proveedores de servicios de Internet y disposiciones finales.

Lo que se esperaba

El capítulo sobre PI del TPP no debiera constituir mayor sorpresa para quienes están familiarizados con los TLC de más reciente generación. En el caso de los acuerdos en los que EE.UU. juega un papel central no es de extrañar que su contenido se asemeje a la legislación de este país. Algo similar sucede con los tratados promovidos por la Unión Europea (UE). De hecho, tanto EE.UU. como la UE han explicitado en textos normativos y programáticos que un objetivo principal al concluir sus TLC es que las disposiciones en materia de PI reflejen estándares de protección similares a sus respectivas legislaciones.²

Sin lugar a dudas, ello constituye un reto mayor para países como los de América Latina, no solo porque las características de su modelo de producción industrial y de innovación difieren significativamente de las existentes en la contraparte, sino también porque su realidad y prioridades sociales difieren también notablemente.

El TPP incluye disposiciones que superan no solo a los Adpic, sino también a los acuerdos de libre comercio suscritos por parte de los tres países de América Latina miembros del TPP con EE.UU., la UE y la Asociación Europea de Libre Comercio. Una rápida mirada a las disposiciones relativas a la protección de indicaciones geográficas, patentes, derecho de autor y observancia de los derechos permite constatarlo claramente.

En relación con las indicaciones geográficas se dispone que una marca, incluyendo marcas colectivas y de certificación, sea la modalidad que se privilegia respecto de signos que identifican bienes o servicios. Véase, por ejemplo, las disposiciones respectivas que establecen las razones para oponerse o el fundamento para la anulación de una indicación geográfica.

En general, en esta materia el tratamiento en el TPP es extenso comparado con el más reciente tratado suscrito por EE.UU. con Perú. Este último contiene una sola disposición sobre el tema comparado con un articulado que se extiende en el TPP más de 3 páginas. Un punto de reflexión relevante en clave normativa y de política de PI, extensible a otras áreas como por ejemplo la relativa a la observancia de los derechos, es si los compromisos asumidos en el TPP son compatibles con obligaciones sobre las mismas cuestiones asumidas en los acuerdos preferenciales suscritos con la UE.

El TPP sigue el curso de anteriores acuerdos comerciales, en los cuales el sector farmacéutico ha ocupado un lugar central que se ha traducido en mayores niveles de protección tanto de patentes como de datos de prueba. Se hace en el TPP un reconocimiento a la Declaración ministerial de Doha sobre salud de 2001; sin embargo, el TPP incluye disposiciones ya conocidas y que han resultado conflictivas sobre protección de la información no divulgada sobre seguridad y eficacia de productos farmacéuticos y



también con respecto a la extensión de la duración de las patentes en respuesta a atrasos administrativos incluidos aquellos de la autoridad sanitaria.

Cabe mencionar que con respecto a la extensión de la duración de las patentes por atrasos administrativos, el texto final del TPP no innova hacia un modo maximalista como se desprendía de la posición original de EE.UU. En este sentido, los países de la región, particularmente Chile y Perú, defendieron exitosamente lo ya previsto en sus respectivos TLC con el país norteamericano. El cambio, sin embargo, sí puede considerarse más importante para México, puesto que el TLCAN no reguló estas materias con el nivel de detalle y exigencia que se encuentra en los acuerdos comerciales de Chile y Perú.

De manera similar, las disposiciones sobre derecho de autor y derechos conexos siguen la línea de lo previsto en los TLC con Chile y Perú. Se reafirma de este modo la no jerarquía entre el derecho de autor propiamente como tal y los derechos conexos relativos a artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas. Es decir, el TPP ratifica la visión anglosajona que pone en pie de igualdad los derechos económicos asociados con el derecho de autor. Un aspecto interesante es la retención del término de protección de 70 años, que ya se encuentra en los acuerdos anteriores de Chile y Perú, contrariamente a pretensiones originales de una protección mínima de 90-120 años, especialmente para aquellos derechos de autor cuyos titulares son personas jurídicas.

Finalmente, con respecto a cuestiones relativas a medidas de protección tecnológica e información sobre la gestión electrónica de derechos y en general a la observancia de derechos, se continúa en la línea ascendente y se refuerzan los procedimientos y recursos civiles, administrativos, penales y en frontera respecto a lo ya previsto en los TLC anteriores, sin perjuicio de algunas novedades. El TPP también es más categórico en temas relacionados con proveedores de servicio de Internet, puesto que se tratan directamente mientras en los acuerdos anteriores con Chile y con Perú las disposiciones se agrupaban indirectamente bajo el título de limitación de la responsabilidad de tales proveedores.

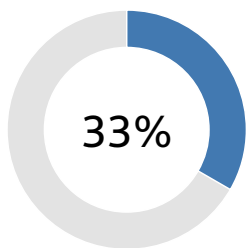
Lo novedoso

El TPP consolida lo que en los últimos 20 años EE.UU. ha logrado obtener en sus TLC. En este sentido, Korus y la fracasada negociación del ACTA son antecedentes importantes para comprender los logros alcanzados en materia de PI. Esta sección, precisamente, revisa algunos de los aspectos novedosos del TPP al ser comparado con acuerdos anteriores.

Llama positivamente la atención la primera sección del capítulo sobre disposiciones generales. En esta se reproduce en varias instancias el Acuerdo Adpic, entre otros su Artículo 7, que trata sobre objetivos y enfatiza la necesidad de mantener un sistema equilibrado de derechos y obligaciones que favorezcan el bienestar social y económico. El TPP mantiene también el statu quo en relación con el agotamiento de derechos, que permite a las Partes adoptar el principio de agotamiento que estimen oportuno, contrariamente a pretensiones originales de limitar esta facultad al ámbito del derecho de autor.

De particular interés es la disposición que subraya el fundamento de los sistemas nacionales de PI. Al respecto, el TPP afirma que los objetivos de política de PI incluyen la promoción de la innovación y la creatividad, facilitar la difusión de la información, del conocimiento, de la tecnología, de la cultura y de las artes y fomentar la competencia y el desarrollo de mercados abiertos y eficientes. Menciona también que todo ello debe expresarse en sistemas de PI que respeten los principios de transparencia y debido proceso y que tomen debidamente en consideración los intereses de todas las partes, incluyendo titulares de derechos, proveedores de servicios, consumidores y público en general.

La referencia a los fundamentos de la PI en la forma explícita que lo hace el TPP es una novedad en la evolución de los TLC. Según nuestro conocimiento, esta es la primera vez que un acuerdo donde EE.UU. es parte hace un reconocimiento tan directo de estos fundamentos. Ello es significativo a efectos de eventuales interpretaciones del TPP por parte de una instancia judicial o al adoptar normativa interna. Es decir, dicha orientación



del intercambio comercial total de Perú con el mundo en 2014 se llevó a cabo con países miembros del TPP. (Mincetur)

teleológica permite a las autoridades nacionales implementar de forma constructiva el TPP, teniendo presente, sin embargo, que la liberalidad interpretativa termina ante la claridad de una norma.

La parte más controvertida es probablemente la relativa al sector salud, en particular las disposiciones sobre patentes y protección de información no divulgada. El TPP sigue la línea de protección cada vez más reforzada que refleja la evolución de los acuerdos anteriores. Si en los tratados concluidos por Chile y Perú no se innovaba mayormente respecto de los Adpic en materia de protección de plantas y animales, el TPP insinúa vagamente que pueden protegerse por patentes de "invenciones derivadas de plantas". Qué se entiende por ello será una cuestión importante al momento de la implementación.

Sin lugar a dudas la protección de la información no divulgada se refuerza en el TPP. Por un lado, se mantiene la protección mínima de 5 años para nuevos productos farmacéuticos en el territorio de la Parte; pero, por otro lado, se admite igual protección sobre la base de evidencia aprobada previamente en otro territorio, lo que implicará algunos retos en la implementación de esta disposición, aun cuando en el caso de Chile hay una declaración al respecto que reserva lo dispuesto en su ley nacional y que obliga al uso de la información en el espacio de 12 meses de obtenido el primer registro o autorización sanitaria en el extranjero.

Otra novedad importante, que puede complicar la entrada de productos genéricos, es la disposición sobre una protección suplementaria de 3 años respecto de nueva información clínica en apoyo de una autorización de comercialización previamente aprobada para productos farmacéuticos que cubran una nueva indicación, nueva formulación o un nuevo método de administración.

Entre las disposiciones que generaron mayor debate dentro y fuera de la sala de negociación del acuerdo se encuentra la relativa a la protección de los datos de prueba de los llamados productos biológicos que, en versiones originales, contemplaban una protección de hasta 12 años.

El TPP afirma que la protección de biológicos se encuentra en un estadio de evolución y que por esta razón debe ser revisada. El texto finalmente negociado consagra una protección de 8 años desde la primera aprobación del producto en la Parte respectiva. Reconoce como opción una protección de 5 años, que debe complementarse con otras medidas y con el "reconocimiento que las circunstancias del mercado también contribuyen a una efectiva protección". Esta alternativa, que aparentemente tiene inspiración en la práctica japonesa, es como mínimo ambigua y, si bien parece pretender que se opte entre dos opciones con una protección comparable, es una fuente de controversias previsible.

El TPP reafirma y refuerza las disposiciones preexistentes sobre el llamado linkage entre la autorización de comercialización y la vigencia de la patente, consagrando a estos efectos el principio que se encuentra en el tratado con Perú. La expiración de la patente, anterior al plazo de protección de la información no divulgada, no altera el plazo de exclusividad de la información. Es relevante también hacer notar que el TPP prevé expresamente la obligatoria concesión de patentes a nuevos usos de productos ya conocidos, nuevos métodos para utilizar un producto conocido y nuevos procedimientos para utilizar un producto conocido.

En materia de observancia de derechos, el TPP consolida lo ya alcanzado en tratados como el Korus, ampliando entre otras las disposiciones sobre procedimiento y sanciones penales. En este sentido, se amplían las sanciones que deben incluir privación de libertad y sanciones pecuniarias lo suficientemente altas para disuadir futuras infracciones. Resulta relevante, por ejemplo, la disociación entre escala comercial y ventaja económica: la falsificación de mercancías y piratería son punibles cuando sean a escala comercial, lo que incluye actos que tengan una motivación de ventaja comercial o ganancia económica y también actos "significativos" por más que no haya ventaja comercial o ganancia económica.

Se trata ciertamente de una disposición que requerirá buen tino a la hora de legislar internamente si se quiere satisfacer el principio de legalidad que, sin duda, todo tribunal con control de constitucionalidad va a exigir.

Cabe destacar además el principio general sobre proporcionalidad que consagra el TPP y que será igualmente importante al momento de interpretar y aplicar estas disposiciones. En efecto se reconoce que en la implementación de las disposiciones sobre observancia cada Parte deberá tomar en consideración la "proporcionalidad" entre la seriedad de la infracción y la aplicación del recurso y sanción correspondiente, así como los intereses de terceras partes.

Es interesante y novedoso que el TPP incluya disposiciones sobre secretos comerciales ampliando a este respecto la batería de procedimientos y recursos penales.

Observaciones finales

Si bien existe un debate paralelo, no agotado, sobre la transparencia en las negociaciones internacionales, se abre la hora de la acción por parte de los gestores y de los responsables de la gestión pública. En este sentido, debe redoblar la atención sobre el desafío que supone implementar el TPP y, en este caso en particular, el capítulo sobre PI.

Es necesario tener presente la severidad con que EE.UU. percibe los compromisos que las contrapartes asumen en estos tratados. En virtud del llamado proceso de "certificación", que ha sido la pauta en los recientes TLC, el acuerdo no entra en vigor hasta que el ejecutivo estadounidense verifique que la contraparte ha incorporado efectivamente en su ley interna las obligaciones asumidas en el tratado comercial; naturalmente, según la interpretación que dicho ejecutivo hace de tales obligaciones.

Este aspecto de la ley estadounidense se ve reforzado por el monitoreo pormenorizado que lleva a cabo la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos sobre el nivel percibido de respeto a la PI en terceros países, en particular a través de los informes conocidos como *Special 301* de la ley comercial. Al respecto, cabe observar una particularidad de la ley de comercio norteamericana, donde se estipula bajo el título de soberanía⁹ que ningún tratado comercial puede contrariar la ley nacional y que ningún acuerdo puede impedir modificaciones posteriores a la ley federal o estatal del país. Indiscutiblemente, hay aquí un conflicto o cuando menos un desequilibrio, que los parlamentos nacionales deben asumir adecuadamente.

Sin perjuicio de lo anotado, los desafíos para los gestores y responsables de la gestión pública persisten y deben ser enfrentados con visión de país, teniendo en consideración las condiciones que prevalecen en cada uno de ellos. Una implementación adecuada del TPP debe tener presente las disposiciones preliminares del capítulo de PI que sancionan los fundamentos que deben prevalecer en los sistemas de PI. La implementación del TPP es una buena oportunidad para reiterarlos.

En un trabajo publicado en 2011 por el Banco Interamericano de Desarrollo sobre la experiencia de la región latinoamericana en la implementación de los TLC se enfatizaba que hay tareas pendientes en esta materia que requieren atención preferencial. Se hacía referencia a cuatro políticas públicas que exigen un examen más fino para responder adecuadamente a los retos y oportunidades que presentan estos acuerdos comerciales y que versan sobre la salud pública, la promoción y difusión del conocimiento, la competencia y la observancia de derechos.

El presupuesto para el análisis de estas cuatro políticas públicas es que la implementación de los capítulos de PI de los TLC no es un fin en sí mismo, sino que debería ser la plataforma para el desarrollo económico, social y tecnológico. La atención de las tres primeras políticas públicas tienden a equilibrar la PI con otros derechos o valores que son tanto o más importantes que ella, mientras que las políticas en torno a la observancia se relaciona con el cumplimiento de buena fe de las obligaciones asumidas, atendiendo a las

particularidades de cada una de las sociedades, sus carencias y necesidades de desarrollo y el principio de proporcionalidad que sanciona el TPP.

El informe al BID concluía con una serie de recomendaciones que nos parecen pertinentes y válidas de reexaminar a la luz del TPP, entre ellas: 1) mejorar la transparencia en estos procesos a fin de involucrar a la sociedad, mejorando así el nivel de análisis e identificando mejor las necesidades nacionales; 2) poseer una agenda propositiva, y no simplemente reactiva, fijando objetivos que contemplen los intereses de los creadores nacionales en temas de PI y permitan obtener beneficios en materia de transferencia de tecnología, desarrollo cultural, acceso a medicamentos, seguridad jurídica y mejoramiento del clima de negocios; 3) familiarizarse con las particularidades del sistema jurídico del socio más fuerte permitirá comprender mejor la lógica de la negociación y proponer alternativas u ofrecer argumentos que puedan ser claves para saldar eventuales diferencias, como así también disponer de más opciones en la implementación; 4) tener la convicción de que la negociación no termina formalmente con la suscripción del acuerdo: importantes tareas deben asumirse a continuación, lo que implica a menudo la renegociación o reinterpretación de disposiciones del TLC que aparentemente estaban cerradas; 5) reforzar los recursos humanos e institucionales y las correspondientes tareas para la cooperación internacional; 6) entender que la implementación de los nuevos paradigmas de protección exigen una modernización del aparato estatal en términos de eficiencia y eficacia que, de no realizarse, puede comprometer la aplicación de los nuevos paradigmas, pero también comprometer los equilibrios con otros valores como salud pública, la competencia, el acceso a los bienes culturales y otros; y 7) abordar la necesidad de diseñar objetivos estratégicos y un plan de acción para llevar a cabo una implementación eficiente y equilibrada. Esto incluye desarrollar planes y objetivos de mediano y largo plazo no solo para la implementación eficiente y equilibrada de las obligaciones asumidas, sino también para que la PI sirva de catalizador para el desarrollo de otras políticas estatales.

En suma, es el momento de mirar hacia adelante y hacer de los compromisos asumidos una oportunidad para que los propósitos de política pública reconocidos en el TPP sean factores que promuevan la innovación y la creatividad, faciliten la difusión de la información, del conocimiento, de la tecnología, de la cultura y de las artes y el fomento de la competencia en mercados abiertos y eficientes.

❶ El TPP tiene sus orígenes en la cláusula evolutiva del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, conocido como P4 y suscrito el año 2005 entre Brunei Darussalam, Chile, Singapur y Nueva Zelanda.

❷ En el caso de EE.UU., véase [Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015, Section 102](#). En el caso de la UE, véase [La política comercial al servicio de la Estrategia Europa 2020](#), p. 16.

❸ Véase SEC. 108. Sovereignty, Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015.

Pedro Roffe

Asociado senior del programa de Innovación, Tecnología y Propiedad Intelectual de ICTSD.

Xavier Seuba

Profesor e investigador senior, CEIPI-BETA, Universidad de Estrasburgo.

Mariano Genovesi

Profesor titular regular del Departamento de Derecho Económico y Empresarial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Sala de prensa

Visite nuestro sitio web para consultar más novedades: <http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes>

Concluye conferencia Nuestro Océano 2015

Reunidos en Valparaíso, Chile, 500 representantes de Gobiernos, ONG y academia anunciaron más de 80 nuevas iniciativas para la protección marina en el marco de la segunda conferencia Nuestro Océano 2015. Estos esfuerzos alcanzan un valor de US\$ 2.100 millones.

Entre los principales avances, se comunicó la creación de dos nuevos santuarios marinos en Wisconsin (zona de los Grandes Lagos) y la costa de Maryland. Además, el secretario de Estado, John Kerry, manifestó que negocian con Cuba el establecimiento de un acuerdo de zona marítima protegida, al igual que diversos acuerdos de cooperación en el tema.

Chile, en tanto, se comprometió con la creación de un área marina protegida dentro de la zona económica exclusiva de Isla de Pascua y con la creación del Parque marino Nazca-Desventuradas, con un área de 297 mil kilómetros cuadrados en la zona de las islas San Ambrosio y San Félix.

Miembros de la ONU adoptan Agenda post 2015

Los 193 miembros de la ONU adoptaron a fines de septiembre una nueva agenda para erradicar la extrema pobreza, impulsar el crecimiento económico inclusivo, abordar las prioridades sociales clave y enfrentar el cambio climático y la degradación ambiental.

El documento, "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", reúne cerca de cinco años de negociaciones en diversas áreas que buscan reemplazar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Diversos líderes destacaron la importancia de orientar los planes nacionales de desarrollo y cooperación internacional hacia el desarrollo sostenible.

Otros dieron a conocer sus compromisos sobre las acciones climáticas que podrían plasmarse en un nuevo acuerdo multilateral en la 20ª Conferencia de las Partes en París, Francia. "Lo que ahora cuenta es traducir dichas promesas a la realidad", señaló el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon el 28 de septiembre pasado.

Panamá gana caso OMC sobre Argentina

Un panel de la OMC encontró que varias de las medidas sobre servicios financieros tomadas por Argentina violan ciertas normas del comercio global en respuesta a un reclamo de Panamá.

Mientras que se encontró que las medidas en relación a los servicios financieros violan obligaciones de Nación Más Favorecida bajo el Acuerdo sobre Servicios, otras quejas de Panamá bajo el GATT fueron desestimadas.

El panel concluyó que "Argentina actuó de manera incompatible con las obligaciones... del Artículo II:1 del AGCS, recomendamos que el OSD solicite a Argentina que ponga sus medidas en conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del AGCS".

A menos que las partes apelen, el informe del Grupo Especial podrá ser adoptado por el Órgano de Solución de Diferencias después de un periodo de circulación.

Mercosur y UE intercambian ofertas

El bloque de la Unión Europea (UE) y los países integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur), a excepción de Venezuela, intercambiaron ofertas a principios de octubre en Asunción, Paraguay a fin de avanzar en la negociación del acuerdo bilateral que ha estado en el tintero desde 1999.

Entre el 1 y 2 de octubre, los negociadores se reunieron para presentar las ofertas respectivas en las distintas materias que conformarán el acuerdo. No obstante, será hasta el mes de noviembre cuando los ministros de comercio acordarán dicho intercambio.

Rigoberto Gauto, vicescanciller de Paraguay, señaló a los medios que "la reunión resultó positiva y hay sectores importantes que no estaban contemplados en la oferta de la UE en 2004 y que hoy sí están".

En cuanto a la ausencia de Venezuela en las negociaciones, el vicescanciller Gauto precisó que por ser miembro pleno de Mercosur, posteriormente se incorporará.

Cierre de acuerdo TPP se centra en su ratificación

Luego del cierre de las negociaciones del acuerdo TPP el pasado 5 de octubre, los Gobiernos de las 12 economías participantes se preparan para iniciar los respectivos procesos internos de ratificación.

Mientras que muchos de los detalles del acuerdo han salido a la luz por diversas fuentes, los términos del acuerdo aún no son públicos. Además, se encuentra pendiente que el documento sea verificado, traducido y sometido a revisión legal.

Ahora la atención está puesta en Estados Unidos, que se encuentra en un escenario preelectoral; y Canadá, que viene de celebrar elecciones generales en las que se impuso el Partido Liberal.

Diversos líderes de los Estados latinoamericanos participantes saludaron el acuerdo. El presidente de Perú, Ollanta Humala, resaltó las oportunidades que el acuerdo traerá para las pymes. Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, subrayó que el TPP permitirá que su país diversifique su comercio.

FMI y Banco Mundial inquietos por la economía

Los Gobernadores del Banco Mundial y el FMI, reunidos entre el 9 y 11 de octubre en Lima, Perú, manifestaron su preocupación por el escenario económico internacional. Sin embargo, también saludaron la reducción de la pobreza extrema a menos del 10% a nivel global.

La reunión anual de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del FMI se realiza una vez al año para discutir los avances de las respectivas instituciones.

El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, confirmó que la economía latinoamericana sufriría una contracción de 0,3% en 2015, aunque en 2016 aumentaría a 1,1%. Kim considera que los Gobiernos deben adaptarse rápidamente a este nuevo escenario y tomar medidas inmediatas para incrementar la productividad y mejorar el acceso a la educación y los servicios públicos.

El próximo encuentro de ambas instituciones de llevará a cabo en Washington del 15 al 17 de abril durante las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y del FMI.

Brasil difunde sus metas sobre reducción de carbono

En el marco de la Cumbre de Desarrollo Sostenible en Nueva York, Estados Unidos, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, divulgó los objetivos de reducción de emisiones de su país hacia 2030.

Rousseff señaló que Brasil reduciría en un 37% sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2025 y en un 43% en 2030. La propuesta brasileña también prevé el desmantelamiento del uso ilegal de la tierra y la reducción de la deforestación en 12 millones de hectáreas.

Con este anuncio, Brasil busca cumplir con el requisito de que las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático determinen nacionalmente sus propias contribuciones. Esta meta deberá ser presentada en la 21ª Conferencia de las Partes a realizarse en diciembre en París, Francia.

El objetivo global es intentar limitar a 2º C el aumento de la temperatura mundial. De acuerdo a esto, las metas de Brasil forman parte de una propuesta por lograr una economía libre de carbono hacia 2100.

México aplica aranceles a productos de acero

En un contexto de competencia cambiante en el mercado del acero, donde China se yergue como uno de los principales productores globales, México decidió aplicar un arancel de 15% a ciertos productos del acero por un periodo de seis meses.

La medida entró en vigor el 8 de octubre para aquellas importaciones de productos procedentes de países con los cuales México no tiene acuerdos de libre comercio.

La Secretaría de Economía ha conducido diversas investigaciones e impuesto cuotas *antidumping* y medidas compensatorias por productos de acero procedentes de China, Alemania, Francia e India en los últimos meses debido precisamente a sus bajos precios de entrada al mercado nacional en comparación al acero mexicano (ver [Puentes, julio 2015](#)).

El Gobierno de México declaró que están revisando seis procedimientos por dumping en acero, los que podrían finalizar en 2016 con la imposición de cuotas.

Publicaciones sugeridas

Puentes recomienda en esta sección algunas nuevas publicaciones de ICTSD y otras instituciones que están contribuyendo al estudio y una mejor comprensión del comercio internacional, con implicaciones también para América Latina.



Diez años de Ayuda para el Comercio: ¿qué sigue? **Aid for Trade 10 years on: what's next?**

La siguiente publicación analiza los impactos de la Iniciativa Ayuda para el Comercio de la OMC. El autor resalta los avances en materia de construcción de capacidades comerciales, movilización de fondos para cooperación comercial y reducción de los costos del comercio, lo que ha permitido que los países en desarrollo incrementen su participación en el comercio global y disminuyan sus índices de pobreza.

El autor concluye que los mejores resultados se obtienen cuando los países se enfocan en hacer del comercio un instrumento efectivo del crecimiento económico y de la reducción de la pobreza a través de enfoques regionales, con una cooperación combinada y con participación del sector privado.

<http://bit.ly/1LKl81G>



Hard law y soft law: opciones para fomentar la cooperación internacional **Hard law and 'soft law': options for fostering international cooperation**

Las normas imperativas o hard law se refieren a las reglas internacionales que presentan un carácter vinculante. La ley blanda o soft law se encuentra contenida en textos y declaraciones con carácter no vinculante. Sin embargo, literatura más reciente considera que diversas normativas hard law pueden ser convertidas de facto en soft law.

El siguiente texto analiza la posibilidad de que la OMC, como facilitador del comercio global, incluya elementos legales de soft law como herramienta para poder alcanzar consensos más fácilmente. Sin embargo, sus alcances deben ser tratados con precaución dado que la OMC es una institución basada en compromisos de normas imperativas.

<http://bit.ly/1XgTqBP>



Consecuencias de la cartelización de materias primas **Consequences of cartelisation in primary commodities**

La siguiente publicación analiza los efectos económicos de los cárteles de exportación sobre la base de los ejemplos del caucho y el plátano. Se concluye que los cárteles internacionales incrementan los precios de los bienes muy por encima de su precio competitivo afectando a los consumidores, especialmente en países en desarrollo.

Dado que bajo la normativa actual del comercio internacional un país miembro no puede solicitar la intervención de la OMC ante la actividad anticompetitiva por parte de actores privados, los autores consideran que debe darse un esfuerzo normativo internacional para evitar que los cárteles de exportación evadan el peso de la ley.

<http://bit.ly/1W381Uc>



Derecho de inversión y otros regímenes legales internacionales **Investment law and other international legal regimes**

El derecho de inversión internacional coexiste e interactúa con otros regímenes legales y suele ser una relación complicada, por lo que abordar esta materia cobra especial importancia en el contexto actual de las negociaciones de acuerdos megarregionales con normas que regirán sobre millones de personas.

Esta publicación de la Iniciativa E15 analiza esta interacción y considera que esta preocupación debe ser atendida por los negociadores. Sin embargo, el autor asegura que cambios radicales al sistema, tales como permitir que actores no estatales puedan querellar a inversionistas, podría tener efectos negativos sobre el sistema.

<http://bit.ly/1GkR5lt>



Panorama sobre el medio ambiente 2015

Environment at a Glance 2015

La siguiente publicación de la OCDE analiza el avance de sus miembros sobre la respuesta de sus miembros frente a los desafíos ambientales. Para ello, la publicación presenta las tendencias sobre 11 indicadores, tales como las emisiones de CO₂, la diversidad biológica y el uso de recursos forestales. El estudio brinda también la situación de 10 indicadores económicos relacionados tales como los regímenes tributarios ambientales, el precio de los combustibles y la cooperación al desarrollo en este campo, entre otros.

Entre las principales conclusiones se encuentra que las emisiones de efecto invernadero han disminuido entre el 2000 y 2012 en los países OCDE, contrariamente a la tendencia global. Sin embargo, los países desarrollados mantienen una considerablemente mayor emisión de CO₂ per cápita que el resto del mundo: 9,3 toneladas por año versus 3,4. <http://bit.ly/1jLLBdY>



La OMC cumple 20 años: desafíos y logros

La siguiente publicación de la OMC analiza los principales avances de la institución a 20 años de su nacimiento. En su prólogo, su director general, Roberto Azevedo, resalta la importancia de los acuerdos que se han alcanzado, como el Acuerdo de Facilitación del Comercio y el Acuerdo sobre Tecnología de la Información. Azevedo subraya también el rol de la OMC como facilitador de la participación de los países en desarrollo en el comercio global. Desde 1995 su participación en el comercio global de mercancías ha pasado de 27% a 43%.

La publicación también hace un repaso de la historia de la Organización, su proceso de expansión, marco institucional, funcionamiento y principales procesos de negociación llevados a cabo. La publicación busca resaltar que, a pesar de las complicaciones normales dados los crecientes flujos comerciales, contar con un sistema multilateral de comercio es el mejor camino.

<http://bit.ly/1VH6VrX>



Financiamiento climático en 2013-14 y el objetivo de los USD 100 mil millones

En la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2010 los países desarrollados se comprometieron a alcanzar hacia 2020 una movilización conjunta de US\$ 100 mil millones anuales para acciones contra el cambio climático en los países en desarrollo. Esta publicación de la OCDE busca realizar un seguimiento al cumplimiento este compromiso.

El estudio estima la referida contribución en US\$ 52 mil millones en 2013, incrementándose a US\$ 62 mil millones para 2014. En promedio para los dos años analizados, 71% del financiamiento provino de fuentes públicas bilaterales o multilaterales, mientras que 26% fue movilizado por fuentes de financiamiento privadas y 3% correspondió a créditos de exportación.

<http://bit.ly/1GkbxTe>



Incentivos legales para la conservación: diez propuestas legales

Aun con los esfuerzos institucionales que Perú viene realizando para el establecimiento de un marco institucional a favor del medio ambiente, el país no cuenta todavía con incentivos fiscales dirigidos a promover la conservación. Es en este contexto que el siguiente estudio realizado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental propone una serie de mecanismos fiscales para promover la conservación ambiental en Perú.

La publicación incluye diez ideas de incentivos fiscales prioritarios. Estas propuestas son sumamente específicas y presentan los que serían los textos modificatorios a las leyes vigentes. Entre estos se consideran normativas favorables a la promoción de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre recientemente implementada. Se plantean incentivos fiscales a las donaciones con fines ambientales, créditos en favor del consumo de bienes y servicios verdes así como incentivos en favor de la investigación científica.

<http://bit.ly/1Pwm4xn>

SIGA EXPLORANDO EL MUNDO DEL COMERCIO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE CON LA RED BRIDGES DE ICTSD

PONTES

Análisis y noticias sobre comercio y desarrollo sostenible para el mundo de habla portuguesa- *Idioma português*
www.ictsd.org/news/pontes

BIORES

Análisis y noticias sobre comercio y ambiente para una audiencia global- *Idioma inglés*
www.ictsd.org/news/biores

BRIDGES

Noticias relativas al comercio mundial desde una perspectiva de desarrollo sostenible- *Idioma inglés*
www.ictsd.org/news/bridges

桥

Análisis y noticias sobre comercio y desarrollo sostenible para el mundo de habla china- *Idioma chino*
www.ictsd.org/news/qiao

МОСТЫ

Análisis y noticias sobre comercio y desarrollo con enfoque en los países del CEI- *Idioma ruso*
www.ictsd.org/news/bridgesrussian

BRIDGES AFRICA

Análisis y noticias sobre comercio y desarrollo sostenible con énfasis en África- *Idioma inglés*
www.ictsd.org/news/bridges-africa

PASSERELLES

Análisis y noticias sobre comercio y desarrollo sostenible con énfasis en África- *Idioma francés*
www.ictsd.org/news/passerelles



Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible

Chemin de Balexert 7-9
1219 Geneva, Switzerland
+41-22-917-8492
www.ictsd.org

La producción de PUENTES es posible gracias al apoyo generoso de todos nuestros donantes, que incluyen:

DFID – Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido

SIDA – Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional

DGIS – Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda

Ministerio de Relaciones Exteriores, Dinamarca

Ministerio de Relaciones Exteriores, Finlandia

Ministerio de Relaciones Exteriores, Noruega

Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia

PUENTES también recibe contribuciones en especie de nuestro socio colaborador y de los miembros del Consejo Editorial.

PUENTES recibe publicidad pagada y patrocinios para apoyar el costo de la publicación e incrementar su impacto a nivel global y en Latinoamérica. La aceptación de las propuestas queda a discreción de los editores. Las opiniones expresadas en los artículos firmados de PUENTES son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista de ICTSD.



Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons de Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Precio: US\$ 10.00
ISSN 1563-0013

